

Sombra de la mafia: El desplazamiento y la esclavitud en América Latina

Tabla de contenido

Esclavos del Crimen en América Latina	3
Los hombres que vendían a las mujeres: redes de trata de personas en Centroamérica.....	5
Esclavos del narco: Esclavos especializados	26
Más, y más, y más	28
Deben buscarlos vivos	29
Nueve... ..	30
"Les estorban"	31
De esclavas y siervas: La escurridiza red de los cuerpos ocupados	35
Su cuerpo es su cuerpo	35
A ciegas en el laberinto	39
La vida no tan alegre.....	43
La historia común, repetida.....	46
El río revuelto.....	49
Las manos que tejen las redes.....	52
Las grandes sombras de la trata.....	54

Esclavos del Crimen en América Latina



En Latinoamérica, la palabra esclavitud evoca imágenes de indígenas sometidos a trabajos forzosos por el látigo y de subastas de africanos recién desembarcados de los barcos negreros. Hoy las imágenes son otras: mujeres encerradas en burdeles, engañadas, amarradas y

obligadas a servir de esclavas sexuales; migrantes secuestrados forzosos bajo amenaza a tomar armas y trabajar como sicarios, niños de 12, 13 o 14 años cargando fusil a nombre de alguna organización criminal.

Detrás de estas atrocidades está el crimen organizado. Para las grandes mafias son una fuente de lucro adicional a sus negocios principales de tráfico de drogas, extorsión y micro-tráfico. Pero alrededor de la explotación humana también se tejen redes medianas y pequeñas, negocios discretos. Lo que tienen en común es que ven en las personas más desprotegidas —mujeres, niños, personas indocumentadas— una posibilidad de ganancia.

Nuevamente una alianza de medios digitales de la región – bajo la coordinación de InSight Crime y con el apoyo de la organización Internews con sede en Washington DC, explora el impacto del crimen organizado sobre los derechos humanos en América Latina, esta vez volviendo la mirada sobre los esclavos del crimen.

En México, Animal Político descubrió que no solo son los migrantes indocumentados que son obligados a punta de amenazas de muerte a trabajar forzosamente para las mafias, sino que los carteles parecen estar secuestrando a profesionales y técnicos para obligarlos a trabajar estableciendo redes de comunicación. El crimen organizado mexicano también se aprovecha de los estimados 25.000 niños, niñas y adolescentes que han sido enrolados en sus filas en los últimos seis años.

En Colombia, también el reclutamiento forzado por parte de guerrillas y organizaciones de crimen organizados es un fenómeno que toca a los niños y adolescentes. Algunas estimaciones dicen que habría unos 18.000 niños en sus filas. VerdadAbierta.com exploró este fenómeno en el municipio de Tumaco sobre el Pacífico colombiano, uno de los mayores productores de coca del país y un importante punto de salida para los cargamentos de drogas ilegales.

En Centroamérica redes grandes y pequeñas se dedican a la compra-venta de mujeres engañadas con promesas de glamurosos trabajos como modelos o de simples empleadas solo para terminar en prostíbulos de mala muerte. Eric Olson, experto en temas de seguridad del centro de pensamiento Woodrow Wilson Center for International Scholars, testificó en el congreso estadounidense que la trata es la segunda amenaza más grande del crimen organizado en Centroamérica, después del narcotráfico. El Faro de El Salvador descubrió historias terroríficas que muestran cómo funcionan las redes de trata en la región y los frustrados esfuerzos de hacer justicia. Plaza Pública en Guatemala detalla las diferentes formas en que las mujeres terminan siendo mercancía.

A través de la trata, el trabajo forzado, y el reclutamiento forzoso el crimen organizado de América Latina se enriquece con el sufrimiento humano. Mientras tanto las víctimas anónimas de esa esclavitud claman por su libertad y nuestra atención.

Los hombres que vendían a las mujeres: redes de trata de personas en Centroamérica

Por Oscar Martínez



Pregunta uno de los fiscales. Contesta Grecia.

—¿En qué parte se lo hicieron?

—En la pantorrilla de la pierna derecha. Nos llevaron a un lugar donde nos hicieron el tatuaje. Nos dieron de comer y de oler una sustancia que me durmió. Cuando desperté ya tenía el tatuaje. Es

una mariposa en una rama, la cual forma la zeta. Esa era la distinción, significaba que era de ellos, que era mercancía.

Grecia se ha ido. Relató dos veces de qué forma un grupo de crimen organizado utilizó su cuerpo como recipiente de lo que les dio la gana. Luego tuvo que irse. Lo relató ante las autoridades de El Salvador y ante las de México. Grecia ya no vive más en El Salvador. Es una refugiada en algún otro país. Por protocolo de seguridad pocos saben cuál es ese país.

Sé que tiene 29 años, que tiene tres hijos de seis, tres años y diez meses, que es casada y era desempleada cuando decidió migrar. Las únicas palabras de Grecia que he escuchado provienen de la grabación de una voz que no es suya. Se trata de los 52 minutos que tardé en leer para la grabadora la declaración anticipada que ella rindió para un juez en El Salvador.

En una diligencia hecha para el Juzgado Noveno de Paz de la ciudad de San Salvador, enfrente de uno de los que ella reconocía como victimario, a las nueve de la mañana del 2 de julio del año 2010, la testigo conocida como Grecia contestó a las preguntas de fiscales y defensores que le preguntaron qué le ocurrió. Cómo sobrevivió.

El testimonio

Pregunta uno de los fiscales. Contesta Grecia.

—¿Por qué razón fue citada por este juzgado? Usted fue citada por este juzgado para que se haga justicia sobre los delitos de secuestro, violación y trata de personas cometidos en su contra. ¿Cuándo inició el viaje a Estados Unidos?

- El día 13 de abril del año 2009.
- ¿Con qué intención inició el viaje?
- Debido a la situación económica del país.
- ¿Con quién inició el viaje?
- Con el señor Ovidio Guardado
- Describa físicamente al señor Ovidio.
- Es una persona del sexo masculino de 69 años de edad aproximadamente, piel blanca, cabello corto, canoso, ondulado, de 1.77 aproximadamente de altura, sin dentadura. Tiene una cicatriz en la cabeza.
- ¿Qué hizo este señor?
- Me engañó. En ningún momento me dijo que era coyote. Dijo que íbamos a ir a Estados Unidos, y ya estando en México mostró su verdadero objetivo.
- ¿Y cuál era su objetivo?
- El primer objetivo de él era violarme, pero debido a la situación, esto no pudo ser.
- Cuando se menciona que inició el viaje, ¿cuántas personas la acompañaron en este viaje?
- Solamente el señor Ovidio.

Ovidio es un campesino moreno y arrugado, pero aún fuerte, como un árbol seco, sin hojas, pero que seguirá en pie por años. Ovidio es pariente del esposo de Grecia. Ovidio es vecino de la mamá y de la suegra de Grecia. Grecia confiaba en Ovidio.

La red Barberena

Tal como le ocurrió a Grecia, el anzuelo en la mayoría de casos de mujeres convertidas en mercancía es la esperanza de salir de la pobreza. Uno de esos casos es el de la red de Barberena, que no solo habla de la procedencia de las víctimas, sino que revela muchas otras facetas de los grupos de tratantes de la región. La de Barberena era una estructura de 12 hombres y una mujer que operó hasta 2006 en Barberena, un municipio rural del departamento guatemalteco de Santa Rosa, en la costa Pacífica de aquel país. Una red asesina que incluso tenía una finca de maíz donde hacían sangrientos rituales para vestir de pánico a sus víctimas.

Una red corrupta que tuvo la suerte de que un juez salvadoreño dejara en libertad a la mayoría de sus integrantes. Pero de esas facetas de la red ya habrá tiempo de

hablar. Ahora mismo, lo que interesa es que ese grupo criminal arroje pistas de la selección de las víctimas. La red de Barberena operaba desde el bar El Pantanal. La modalidad de engaño era sencilla. Enviaban en expedición a hombres salvadoreños o mujeres salvadoreñas que tras años de ser obligadas a servir sexualmente en El Pantanal –una de las sobrevivientes estuvo siete años encerrada ahí– terminaban creando una costumbre insana a la que se llega a través del exceso de maltrato.

Enviaban a estos hombres y mujeres a cantones y caseríos de los departamentos fronterizos de Santa Ana y Ahuachapán en El Salvador. Recorrían las humildes casas con la excusa de ser empleados de un supermercado y un comedor recién abiertos en Barberena que necesitaban de personal. Ofrecían 70 dólares semanales más todos los costos del traslado hasta Barberena, e incluso 50 dólares en mano para que la engañada dejara a su familia.

Los cuatro países del norte centroamericano son de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, en los cuatro países ocurren casos de explotación sexual. Las cifras explican que Nicaragua, El Salvador y Honduras son los países de donde provienen la mayoría de las víctimas del mercado de la trata del norte de la región. Guatemala es el lugar por excelencia donde esas víctimas son esclavizadas. Y los cuatro son, gracias a los miles de migrantes que producen, la gran cantera de los tratantes mexicanos. Los expertos –oenegés, fiscales, policías, organismos internacionales– explican que la vecindad con México y el enorme flujo de migrantes que atraviesa Guatemala hacen de ese país un lugar ideal para las bandas de trata.

Los timadores que recorren cantones, aldeas y caseríos no trabajan como mormones que van de casa en casa buscando que con suerte les abra la puerta alguien dispuesto a tragarse su monserga. Estos timadores conviven en la zona, son de sus alrededores, conocen a los pobladores, se hacen pasar por benefactores, echan raíces con nombres falsos. Algunos, dice la encargada de atención psicológica de víctimas de trata de la Fiscalía salvadoreña, Silvia Saravia, saben tanto de las mujeres a las que se acercan, que incluso saben si han sido violadas en su entorno cercano. Los tratantes huelen el desamparo y la vulnerabilidad como los tiburones la sangre.

Las mujeres desesperadas que aceptaban debían viajar casi una hora hasta llegar a las puertas de El Pantanal. Sin ninguna demora, eran recibidas por hombres armados y una mujer guatemalteca, Sonia García. Sonia les pedía que cambiaran su ropa conservadora, de mujer evangélica en muchos casos, y que vistieran la minifalda y la camisa de amplio escote y colores chillones que les ofrecía. Les decía que desde ese momento debían salir a la sala principal de la casona y convencer a los hombres borrachos de que pagaran 50 quetzales (unos siete dólares) por desfogarse con ellas durante 30 minutos. Ellas, las víctimas, normalmente decían

que no, que ese trabajo no era el acuerdo. Entonces, los hombres que rodeaban a Sonia, salvadoreños en su mayoría, les explicaban con los puños y con bates de béisbol que no se trataba de una oferta, sino de una orden.

Cuando en el penal de Apanteos, en Santa Ana, conversé a mediados de agosto con Rigoberto Morán Martínez, uno de los seis condenados por ser de la red de Barberena, él dijo que casi ninguna de las mujeres trabajó la primera semana durante los cerca de dos años que él sirvió en El Pantanal. La mayoría pasaba la primera semana con la cara desfigurada, morada. Y a los clientes de El Pantanal, las mujeres de rostro morado no les gustaban. Pero la conversación con Rigoberto, un hombre que toda su vida ha utilizado un fusil como herramienta de trabajo, nos enseñará luego otras lecciones.

A finales de 2007, 16 de las sobrevivientes de El Pantanal rendían declaración en el juzgado salvadoreño. Veintiséis mujeres en total habían sido rescatadas en un operativo conjunto entre la Interpol de Guatemala y la Fiscalía y Policía salvadoreñas. 20 de ellas eran salvadoreñas. Las otras seis eran nicaragüenses y guatemaltecas. Esto debido a que la mayoría de enganchadores de la red eran de El Salvador.

El informe de este año publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito explica que en El Salvador, las víctimas de trata para explotación sexual detectadas por la Policía entre 2005 y 2010 eran en un 79 por ciento nacionales. En cambio, en Guatemala, en el mismo período, solo el 4 por ciento de las víctimas era de ese país. El 89% eran personas de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

El consenso de estudios y expertos es que las víctimas, eso sí, proceden de un lugar común entre estos países de Centroamérica: la pobreza.

Una salvadoreña rescatada de El Pantanal era menor de edad. Durante el proceso, para que rindiera declaración como testigo protegida, a ella le llamaron Carmencita. Sobre por qué aceptó, a sus 15 años, dejar a su familia e ir a trabajar a Barberena, esta fue su respuesta:

—Había días que mi mami no tenía para comprar frijoles. Sobre aquello que tuvo que soportar en su búsqueda por conseguir esos frijoles, Carmencita dijo esto:

—Había días en los que estaba hasta con siete hombres, pero como a mí no me gustaba nada de eso, hacía berrinche. Un día que el dueño se puso bolo, nos comenzó a pegar con el machete y a mí me hirió la pierna. Yo, llorando, le decía que me llevara al hospital. La herida se me infectó, y sólo me decía que me limpiara la pierna porque daba asco a los clientes.

A los clientes, una niña de 15 años con una herida profunda en la pierna lo que les daba era asco.

El infierno en la tierra

Pregunta uno de los fiscales. Contesta Grecia.

—¿Y luego qué pasó?

—Una vez llegada la noche, el señor Ovidio me llevó hacia un establo que se encuentra a unas cuatro horas de un río que se llama Las Palmas. Eran las 11 de la noche aproximadamente, solo se veían tres caballos. Él me dijo que su Dios le había hablado y que yo tenía que ser de él.

—¿Hizo algo?

—Me puse agresiva, no me dejé tocar. (Ovidio) Se puso violento, me amenazó con una uña larga que tenía, dijo que no era la primera vez que mataba a una persona con una uña. Le dije al señor Ovidio que iba a hacer mis necesidades. En ese momento intento huir, salgo corriendo, llego a un lugar que le dicen El Batallón. Corrí por 45 minutos. Les dije que venía huyendo porque el señor Ovidio quería abusar de mí. Un soldado me contestó que no me preocupara, que me quedara a dormir en ese lugar.

Según su relato, al quinto día de haber salido de El Salvador, ya en México, en el Estado de Tabasco, Grecia se separó de Ovidio. Antes de que lo hiciera, recordó Grecia, él le dijo que conocería el infierno en la tierra. Luego de dormir una noche frente a una guarnición militar mexicana, Grecia volvió a buscar el camino para llegar hasta las vías del tren de Tenosique, la ciudad mexicana que abre la ruta Atlántica del llamado Tren de la Muerte, que abordan los polizones centroamericanos que buscan una mejor vida en Estados Unidos. Grecia encontró a un grupo de migrantes de diferentes países de la región y les preguntó si podía unirse a ellos, les contó lo que Ovidio había intentado una y otra noche durante el viaje. Ellos le respondieron que podía unirse. Y con ellos llegó hasta las vías, un sitio que Grecia describe de la siguiente manera: “Hay champas, hay tiendas, en la parte de enfrente hay como un hotel desalojado, también hay un pantano, había más personas indocumentadas y personas armadas”.

Tenosique, casi frontera con Petén, Guatemala, es una de las ciudades malditas de la migración. De hecho, el hotel al que Grecia se refiere es un hotel que funcionó hasta principios de 2009, y era utilizado por grupos criminales para alojar a los migrantes secuestrados antes de trasladarlos a otras ciudades del norte. Paradójicamente, el nombre del hotel era California.

Pregunta uno de los fiscales. Contesta Grecia.

—¿A qué se refiere con personas armadas? —Se encargan de llevar gente hacia arriba. Iban con jeans y camisas. Dominaban el lugar, ellos mandaban, controlaban las zonas de las vías del tren. Mencionaron que eran de una organización denominada Los Zetas, y que mandaban en la zona.

—¿Cuántas personas estaban en ese lugar?

—Unas 20.

—¿Qué tipo de armas tenían?

—Eran fusiles, armas grandes, pistolas, un hondureño que estaba ahí decía que era una Uzi...

La vida en El Pantanal

—¿Quién vigilaba a las mujeres en El Pantanal? —le pregunto a Rigoberto en este patio conocido como la zona verde del penal de Apanteos en El Salvador. Rigoberto es un hombre de 48 años que estudió solo un año en la escuela, que cultivó milpas de maíz toda su infancia y adolescencia, que en 1982, cuando tenía 18 años y la guerra civil salvadoreña apenas empezaba, fue reclutado por el Ejército, que cuando la guerra terminó siguió trabajando de cargar un fusil, en este caso como guardia de seguridad de una empresa de esas que alquila hombres como Rigoberto a negocios, farmacias, tiendas, supermercados, ferreterías...

—Era gente confiable de él, familia de él. Hombres armados —contesta este hombre bajito, recio, fibroso, de rostro anguloso con un delgado bigote. Se refiere a los hombres de Adán Cerritos, el jefe de la banda de tratantes de Barberena.

—¿Llevaban armas largas?

—¿Y no de eso estamos hablando, pues?

—¿Custodiaban a las mujeres todo el tiempo?

—Todo el tiempo.

La banda de Barberena dibuja con trazos claros muchos de los rasgos comunes de los tratantes de Centroamérica. Uno de esos rasgos es el de la confección del grupo con gente cercana, parientes de ser posible, que administran los burdeles; y, más abajo, unos pocos empleados sin poder, enganchadores y matones que se encargan de llevar chicas y atizarlas a golpes de vez en cuando. Si bien la banda de Barberena era una banda internacional que engañaba mujeres en tres países, no dejaba de ser

un grupo pequeño, que lejos de parecerse a las monstruosas estructuras de los cárteles de la droga, optó por consolidar su bastión único en la comodidad de lo apartado y lo rural. Ahora, ser una banda pequeña no implica ser una banda solitaria.

—¿Por qué nunca denunció lo que pasaba ahí? —pregunto a Rigoberto, concediéndole por un momento una pizca de credibilidad a su argumento de que él era un simple “barrendero, cholero” en el bar El Pantanal. Rigoberto, tras dos años prófugo, fue condenado a seis años de prisión por el delito de trata de personas en febrero de 2011. La condena máxima en El Salvador por el delito de vender a alguien para que sea utilizado como un objeto es de diez años, tres meses y tres días en el caso de que haya agravantes, como que la víctima sea menor de edad. La versión de Rigoberto es que él llegó hasta ahí engañado por una salvadoreña que era enganchadora de la red de Barberena, cocinera en El Pantanal, y de la cual él se había enamorado perdidamente.

—Porque allá no se podía, ya le dije, estaba vendida la policía de allá. No se podía. Arriesgaba mi vida. Podía ser muerto. Yo no sé cuánto dejaba de dinero (Cerritos a la policía) —contesta mientras el sol cae.

—¿Nunca vio mujeres escapar o pedir ayuda?

—No se podía. Tal vez yo hubiera sido uno de los que les diera ayuda, pero no se podía, porque ese hombre (Cerritos) tenía comprada a toda la policía de Cuilapa, de Barberena. Cuando iba a llegar gente de la capital a hacer un cateo de mujeres, la policía ya le había avisado que escondiera a las mujeres. Tal vez dejaba a algunas mujeres que estaban legales. A las demás las escondía en un lugar ahí mismo en el bar, o un día antes las llevaba a esa mentada finca. Había un montón de cafetales alrededor, y él sembraba 60 manzanas de milpa.

La red de Barberena, pequeña y discreta, dueña de un solo burdel, operaba a escala como toda gran red criminal: corrompiendo. Rigoberto asegura que los policías de Barberena y Cuilapa, municipio vecino, pasaban a recoger semanalmente el pago que Cerritos les daba, y que además eran clientes VIP en El Pantanal, al igual que algunos empleados de las alcaldías de esos mismos municipios.

Las alianzas no terminaban ahí, Rigoberto explica que pandilleros de la Mara Salvatrucha de la zona de Ahuachapán, frontera con Guatemala, operaban también como enganchadores. De hecho, un pandillero salvadoreño, Marco Antonio Godoy, cumple condena como parte del grupo de tratantes.

La red de Barberena, pequeña y discreta, operaba a escala como toda gran red criminal: cometía todos los delitos a su alcance si estos dejaban lucro. Durante el juicio, dos de las mujeres rescatadas de El Pantanal aseguraron que en varias

ocasiones los dueños del negocio vendieron por cantidades cercanas a los 5,000 dólares a recién nacidos paridos por las mismas víctimas de trata.

Condenas excepcionales

El Salvador logró en 2011 ganar nueve casos de trata, todos de grupos pequeños. Y a pesar de que el número de casos ganados suena a poco, es el país centroamericano que más triunfos por este delito ha obtenido en las cortes hasta 2011, lo que habla de algún avance, pero de ninguna manera de un ideal en el tema.

La trata es un delito al alcance de la mano. Las víctimas pertenecen al ejército de los nadie de esta región, y los victimarios no necesariamente son delincuentes de trayectoria en el rubro, sino que muchas veces son emprendedores del mundo del crimen que ven en este delito un cóctel de ingredientes, entre estados débiles y víctimas desamparadas, muy apetecible. La UNDOC establece una constante desesperanzadora: solo una de cada 30 víctimas de trata en la región será detectada.

Los de Barberena, a comparación de otros tratantes, eran una red consolidada. Por ejemplo, en El Salvador, Ángel Mauricio Ayala, Kevin Oswaldo Chicas Lobato y Joel Josué Mendoza fueron condenados en 2011 a seis años y ocho meses de prisión por haber obligado a dos nicaragüenses que buscaban empleo en el oriental departamento de San Miguel a prostituirse en una cervecería y, a la que consideraban demasiado vieja para atender clientes, a servir sin paga como empleada doméstica. La vieja tenía 24 años.

Nelson Orlando Campos y Juan Humberto Ramírez Carranza engañaron a dos adolescentes guatemaltecas que, en lugar de modelar ropa, terminaron aplastadas por hombres sudorosos en una cervecería. Penan nueve y ocho años un mes. O Juan Alfonso Cuéllar, que vendió en México a una salvadoreña que viajaba indocumentada rumbo a Estados Unidos y que terminó siendo explotada sexualmente en ese país en un caso similar al de Grecia. Fue condenado a cuatro años el 9 de agosto del año pasado. Eso quiere decir que el 9 de agosto de 2013, al cumplir media condena, y si ha sido un reo ejemplar, podría pasar a fase de semilibertad, en incluso a libertad condicional. “¡Él vendió a un ser humano!”, se quejó indignada Violeta Olivares, la coordinadora de la unidad especializada de trata de la Fiscalía de El Salvador (FGR). En esa unidad, a las condenas de trata como poco las tildan de risibles. “Una mierda de penas”, me dijo una fiscal del equipo en un arrebató de franqueza. En El Salvador, un hombre que cometa el delito de robo, que, por ejemplo, asalte un bus y se lleve celulares, carteras y anillos, y sea detenido y condenado, estaría más años en la cárcel que Cuéllar, que

vendió a una mujer. El ladrón recibiría entre seis y 10 años. El tratante recibió cuatro.

El Salvador reconoció este crimen en su Código Penal a partir de 2003, y es hasta ahora que el tema parece retomarse con cierta fuerza con la creación del Consejo Nacional contra la Trata de Personas en septiembre de 2011. Ahora, ese consejo empieza a tapar los huecos de un muro en el que escasean los ladrillos.

En la conversación en el penal de Apanteos, Rigoberto Morán Martínez, el tratante de Barberena, que dice que llegó al bar El Pantanal bajo engaños de su amada, acaba de cometer un error que solo le deja argumentos absurdos para mantener su fachada de inocente. Su charada era decir que él no denunció por miedo, porque la policía estaba comprada y él era un simple sirviente bajo vigilancia. Sin embargo, en la plática admite que él trabajó ahí en dos períodos, y que en medio de eso regresó a descansar a El Salvador.

—Cuando ya se había ido por primera vez, sabiendo cómo trabajaban ahí, ¿por qué volvió a El Pantanal? —le pregunto a Rigoberto.

—¿Por qué volví? —intenta ganar tiempo cuando se da cuenta de su error.

—Si ya sabía que las tenían encerradas y las maltrataban, ¿por qué volvió? —pregunto de nuevo.

—Quizá no entienda... Hay cosas que estamos hablando...Quizá hay cosas que no las entienda. ¡Sabemos que las brujerías, las hechicerías, existen! La mujer de este señor (Cerritos) trabajaba así, con brujería. Adoraban a un tal San Simón. Así trabajaba la señora de él. Cuando la gente se iba y no quería llegar, la hacían llegar con esas cosas —responde el tratante de la red de Barberena.

Vendida

Pregunta uno de los fiscales. Contesta Grecia.

—¿Cómo llegan las personas que menciona que dominaban la zona?

—Llegaban en carros, armados, entraban y salían.

—¿Cuántos días pasan en ese lugar?

—Tres días hasta que llega el señor Ovidio.

—¿Qué hacían las personas armadas?

—Ellos decían que nos uniéramos a la organización, que nos darían trabajo y comida. Eran el grupo de Los Zetas. Que me iban a pagar el viaje, que me darían comida.

—¿Qué trabajo le ofrecían?

—Que le iba a cocinar a la gente que estaba secuestrada, era más o menos el 20 o 22 de abril del año 2009.

Resumiendo: A este momento del relato, Grecia estaba en Tenosique, México, al inicio del camino de los indocumentados. Estaban en un municipio dominado por Los Zetas. Grecia se había alejado de Ovidio luego de que él intentara violarla en un potrero abandonado, y se había refugiado en un grupo de indocumentados salvadoreños y guatemaltecos.

—¿Qué sucedió cuando Ovidio llegó?

—Se me quedó viendo con una risa burlista y se fue para la casa de ellos (Los Zetas). Estaba como a cinco metros, se dirigió donde Chicho, un chavo de entre 24 y 29 años de edad con una cicatriz en la mejilla izquierda. Era de la organización. Hablaron como 45 minutos con Ovidio. Me miraban, me señalaban, yo estaba con el grupo de personas al que me había pegado.

En ese momento del relato, Grecia cuenta su viaje en tren junto a otros indocumentados secuestrados, custodiados por hombres armados que amenazaban de muerte a quien intentara escapar. Los Zetas utilizaron el tren para transportar a sus secuestrados. El tren de Tenosique viaja rumbo a Coatzacoalcos, Veracruz, y en el camino hace una serie de escalas en pequeños pueblos y rancherías aisladas. En uno de esos pueblos extraviados, en Chontalpa, Grecia recuerda que un salvadoreño de Los Zetas a quien llamaban El Pelón intentó venderla a un señor. Se supone que El Pelón quería hacer un favor a Grecia, pues le dijo que allá arriba a donde iban se sufría mucho. La venta no se consumó, y Grecia luego averiguaría que El Pelón no mentía. Entonces, el fiscal retomó la historia haciendo retroceder a Grecia en su relato.

—Cuando menciona la acción de vender, ¿ya lo habían hecho antes?

—Sí, el señor Ovidio... En mi cara le dieron el dinero por mí.

—¿El señor Ovidio iba en el tren?

—No, se fue a El Salvador con el dinero que le dieron.

—¿Cuánto le dieron?

—Dicen que 500 dólares... Chicho (uno de Los Zetas) me dijo.

—¿Luego qué pasó? —Nos subieron a los camiones y nos llevaron a Reynosa... De Veracruz a Reynosa dura como un día y medio. Era el 26 de abril de 2009, era domingo.

A partir de ese punto, Grecia describió un clásico secuestro de indocumentados por parte de Los Zetas.

Reynosa está en Tamaulipas, el Estado bastión de Los Zetas: ahí aparecieron los 72 cadáveres de indocumentados en agosto de 2010, ahí atraparon este mes de septiembre a El Coss, considerado líder del Cártel del Golfo, la organización que dio vida a Los Zetas, ahí aparecieron 49 cuerpos más, sin cabeza, sin extremidades, el pasado mayo, bajo una enorme Z pintada en una pasarela sobre una autopista.

Al grupo de cerca de 300 migrantes los dividieron en tres casas de seguridad. Encerrados en cuartos sin ventilación, húmedos y oscuros, eran visitados por hombres con armas de fuego y bates que aseguraban que a aquel que no diera el número de teléfono de algún familiar al que pedirle rescate sería torturado. Y entonces, como siempre, algún centroamericano se resistió a dar ese número, se resistió a perder esos 300, 500, 700 dólares que suelen pedir, e intentó resistir la tortura, y todo el grupo de Grecia tuvo que ver cómo los hombres armados hacían chillar a uno que otro y prometían volver por más reacios. Así, contó Grecia, transcurrieron los primeros tres días. Al tercer día, apareció Omega.

Pregunta uno de los fiscales. Contesta Grecia.

—¿Puede describirlo?

—Alto, gordo, con bastante papada, blanco. También le decían Omega, Kike o el Apá. Le dijeron que había unas salvadoreñas como a él le gustaban. Nos señalaron, nos sacó del cuarto para poder ver bien si éramos bonitas. En el cuarto no había mucha luz. Era el jefe de la casa de seguridad.

—¿Por qué dice eso?

—Porque era una de las personas que llamaban a los familiares y les cobraba.

—¿Se quedó en esa misma casa?

—No, me cambiaron de casa, me llevaron a una colonia residencial, a 10 minutos. En los camiones que nos habían trasladado hasta Reynosa. Iban varias personas. Nuevamente nos acuestan en el suelo. En ese lugar fui violada por Omega. Me pegó en la cara, porque le dije que ocupara condón. Me dijo que yo no estaba en lugar de pedir nada. Los abusos fueron constantes, y no solo él.

—¿Podría reconocer a esas personas en persona o en fotografía?

—Sí.

—¿Qué más pasó?

—Los abusos fueron constantes, y no solo él, unas ocho o nueve veces abusó de mí. Decía que él disfrutaba, que tenía que disfrutar también yo. Que no era para que sufriera. Me pegaba. Lo mismo pasaba con las demás personas, pero las que a él le gustaban era el primero en abusar de ellas.

Fueron, recuerda Grecia, varias semanas de abusos y golpes. Grecia asegura que pasaron tres meses y que, a pesar de que su familia en Estados Unidos ya había depositado el dinero de su rescate, ella fue vendida de nuevo.

—¿Cuánto tiempo pasó esto?

—Los tres meses, ya habían pagado todo el dinero, pero me dijeron que me iban a sacar más lucro. Me vendieron nuevamente a un bar que se llama La Quebradita. Ahí me llevaron a prostituirme. Era como una discoteca bar. El primer día fuimos rechazadas. Nos dijo la señora que era la encargada del bar que no teníamos la marca, porque éramos varias las que llevaban, y teníamos que tener marca. No sabía qué era, pero es un tatuaje.

—¿En qué parte se lo hicieron?

—En la pantorrilla de la pierna derecha. Nos llevaron a un lugar donde nos hicieron el tatuaje. Nos dieron de comer y de oler una sustancia que me durmió. Cuando desperté ya tenía el tatuaje. Tenía ardor en la pierna, porque sangraba, no mucho, sino por gotas. Es una mariposa en una rama, la cual forma la zeta. Esa era la distinción, significaba que era de ellos, que era mercancía. Eran cinco mujeres más, se lo pude observar como a cuatro mujeres más en distintos lugares, brazo, espalda, pecho, de distintos colores. El que yo tengo es entre negro y verde. Luego de habernos marcado ingresamos al lugar y comienzan a prostituirnos con los clientes que son de la misma mafia. Los clientes pagaban por nosotras y no recibíamos dinero a cambio. No sé cuánto pagaban.

Grecia cuenta que los clientes la forzaban a fumar crack, a consumir cocaína. Grecia cuenta que los clientes jamás aceptaban utilizar condón. Grecia cuenta que así pasó más de un mes. Grecia cuenta que durante ese tiempo nunca salió, que su vida fue la casa de seguridad, el bar La Quebradita y algunos moteles donde la llevaban los clientes. Grecia cuenta que si un cliente la llevaba a un motel siempre los acompañaba un hombre del bar que la custodiaba. Grecia cuenta que era normal que la golpearan, sobre todo por no querer tomar alcohol o por verse poco entusiasta a la hora de ofrecer su cuerpo a los clientes de La Quebradita. Grecia cuenta que una vez la golpearon tan fuerte que le quebraron la nariz.

Tanto la fractura de nariz como el tatuaje fueron constatados por médicos del Instituto de Medicina Legal en El Salvador, y forman parte del expediente fiscal del caso.

Grecia nunca intentó escapar. Pocos querrían hacerlo si hubieran visto lo que Grecia vio.

—¿Pasó algo más?

—Sí, a Sonia. La dejaron ir porque sus familiares ya habían pagado el secuestro. Los fue a denunciar a Migración. Los de Migración la entregaron a ellos mismos. La quemaron viva, la golpearon muchas veces con un bate. Le decían que eso no se hacía, que con ellos no se jugaba, que había perdido la oportunidad de ser libre. Nos decían que eso nos va a pasar si decíamos algo.

—¿Qué le provocó la golpiza a Sonia?

—La muerte.

—¿Con qué la golpearon? —

Con un bate, pero como no se moría, le prendieron fuego con gasolina. Gritaba de dolor, y ellos le pegaban más. Media hora, 45 minutos. El cuerpo quedó irreconocible, carbonizada, no se le veían pies. Carne quemada sin cabello. La colocaron en un altar de la Santa Muerte ahí mismo.

Las sobrevivientes hablan

En los expedientes judiciales se consigna que el caso Barberena fue descubierto gracias a una denunciante. Basta conocer su periplo para saber que llamarle denunciante a esa mujer es tan simplista como llamarle activista a Gandhi. Esa sobreviviente es una de las 16 mujeres que declararon en el juicio salvadoreño bajo identidad protegida.

El dueño del bar El Pantanal, el tratante Adán Cerritos, tenía una finca de 60 manzanas de milpa rodeada por cafetales. La finca estaba en una de las zonas más rurales del municipio, en las afueras, más allá de la penitenciaría El Boquerón, una de las pocas razones por las que se habla de Barberena de vez en cuando. Esta red de tratantes diversificaba su delito, e igual cometían trata en la modalidad de explotación sexual que en la modalidad laboral. Las mismas mujeres que de lunes a jueves trabajaban la milpa, de viernes a domingo eran abusadas por decenas de hombres en El Pantanal.

Esa finca, según los testimonios que recogió la Fiscalía, y según el tratante con quien hablé, era también el lugar de castigos y escondite del grupo criminal. Ahí

ocultaban a las mujeres cuando los policías corruptos de Cuilapa y Barberena les avisaban que venía un operativo de verificación desde la capital guatemalteca. Ahí esclavizaban en las milpas los fines de semana a aquellas que, debido a los golpes, no estaban aptas para el consumo de los clientes de El Pantanal. Ahí también les enseñaban que los castigos incrementarían en intensidad hasta las últimas consecuencias.

En una ocasión, relataron las sobrevivientes a las fiscales, las ubicaron en círculo, durante la noche, allá en la finca. En medio del círculo, dos hombres y una mujer. Afuera del círculo, hombres armados, resguardando que ninguna echara a correr. Los dos hombres mataron a golpes a la mujer en medio del círculo durante un ritual que duró varios interminables minutos. La mujer había intentado escapar de El Pantanal.

No fue la única. La mujer anónima que luego sería la denunciante vivió una situación similar. Sus constantes negativas a seducir a los clientes de El Pantanal le costaron una paliza de tales dimensiones que los tratantes pensaron que la habían matado. Dejaron el bulto ensangrentado en la finca y decidieron que se desharían de él al día siguiente. La mujer, la sobreviviente, despertó por la noche de su inconsciencia y poco a poco arrastró sus huesos molidos hasta la carretera. Desde ahí, de alguna manera que no se especifica, la sobreviviente llegó hasta la frontera y, ya del lado salvadoreño, se derrumbó frente a los policías, a quienes contó su calvario. En menos de una semana, la Fiscalía salvadoreña armó un operativo en coordinación con la Interpol en Guatemala. La coordinadora fiscal, Violeta Olivares, es muy clara cuando explica por qué no llamaron a la Policía guatemalteca: “No confiábamos en ella”.

En 2006, el juez especializado de Santa Ana, Tomás Salinas, creyó que ninguno de los ocho salvadoreños de la red de Barberena atrapados tenía por qué estar arrestado durante el juicio. Dio medidas sustitutivas, les permitió salir y que llegaran cuando se les convocara para diligencias. Algunos de los miembros de la red, al saber del operativo en El Pantanal, habían cambiado de domicilio en El Salvador, intentaban esconderse cuando fueron capturados. El juez pensó que los hombres que fueron atrapados escapando no escaparían. Todos escaparon. La Fiscalía apeló, y la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión del juez Salinas. Ordenó que los capturaran a todos. De los ocho que el juez Salinas sacó de las rejas, seis han sido atrapados, el último de ellos es Morán Martínez. Dos siguen prófugos.

"Papito"

Los sicarios asesinan. Los traficantes corrompen, matan o amenazan A, B o C. Las bandas de robacarros son un rayo, actúan en un santiamén. Los tratantes son como

el agua que horada la piedra: inclementes, persistentes. Ellos necesitan a su víctima viva y asustada. Viva y aterrorizada. Viva y sumisa. Las golpizas de la finca de Barberena no eran un correctivo para las atizadas. Ellas eran, para los tratantes, muertas vivientes. Las golpizas eran un correctivo para las demás mujeres: vean lo que les puede ocurrir.

El palo, el puño y la violación son el principal método de sometimiento de las redes criminales centroamericanas dedicadas a la trata. Tanto el jefe de esa unidad fiscal en Guatemala, Alexander Colop, como su colega salvadoreña, Smirna de Calles, coinciden en que un patrón en el delito de trata es que los jefes de la banda violen a las víctimas. “Son los primeros en rebajarlas, en utilizarlas, en imponerse ante ellas”, dijo Colop. Tal como lo vivió Grecia.

Como dice el fiscal antitrata de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Julio Prado, si bien las bandas como las de El Pantanal, que engañan víctimas que vienen de mundos ruines, que tienen armas cortas principalmente y técnicas brutales, son los grupos que más abundan en el norte de la región, esto no implica que no existan bandas más sofisticadas.

Prado asegura que en los peores lugares donde ha participado en operativos de rescate de víctimas, estas eran obligadas a entregarse 15 minutos a cualquier hombre a cambio de 50 quetzales (6 dólares), que eran cobrados por el tratante, mientras que ha visto casos de colombianas o rusas por las que algunos clientes pagan 500 dólares por utilizarlas una hora. “La pregunta -dice Prado- es qué tipo de clientes pueden pagar esa cantidad por pasarla bien una hora”.

A partir de 2006, las autoridades guatemaltecas investigaron una red de trata y prostitución para clientes de alto nivel económico. Prado participó en el reconocimiento a una discoteca llamada Caprichos, propiedad del empresario Herman Smith, un comerciante de la noche que se codeaba con funcionarios y personalidades de ese país. En el lugar encontraron salvadoreñas menores de edad, hondureñas y rusas, sistemas de puertas ocultas y túneles que conectaban con casas aledañas donde había libros de autoayuda, de superación y de teorías económicas que, según explicaron algunas víctimas, Smith, a quien llamaban “papito”, utilizaba para explicarles que ellas, a pesar de haber llegado al lugar bajo engaños, ya que estaban ahí podían convertirse en empresarias si aprendían a ver su cuerpo como mercancía. Smith, un tratante persuasivo, convencía a sus víctimas de que él no era su victimario, sino su benefactor. El juicio nunca terminó porque a Smith un sicario le disparó en la sien el 6 de mayo de 2008 dentro de la discoteca Caprichos. El sicario huyó.

Guatemala ya ha condenado a varios colombianos por el delito de trata, acusados de pertenecer a una red conocida como la red del departamento de Pereira,

dedicada a traer mujeres voluptuosas desde esa región colombiana bajo la mentira de que se dedicarán al modelaje. Estas redes, asegura Colop, incluso moldeaban a sus víctimas, poniéndoles implantes de senos y nalgas, asegurándoles que eran necesarias para triunfar en el mundo de las pasarelas. “Las traían a Honduras, y cuando ya no gustaban las traían para acá”, explica Colop. La trata ocurría cuando a las mujeres se les decía que estarían encerradas hasta que con sexo pagaran por los implantes, el traslado, la alimentación, el vestuario. Una cuenta que nunca terminaba de saldarse. Prado incluso explica que la lógica de traer colombianas a Guatemala responde al ojo de buen empresario de los que entienden que los narcos de aquel país instalados en Guatemala pagarán grandes sumas por acostarse con una bella pereirana.

En El Salvador, la autoridad de mayor nivel a cargo de crear estrategias para combatir el delito de trata, el viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno, asegura que “hay una estructura de gente organizada con mucho poder económico que se ha lucrado de esta situación y que no lo sabíamos. Gente que no nos imaginábamos que está en este negocio y que lamentablemente aún no contamos con las pruebas que nos vinculen hasta ellos”.

Redes como la de Smith o la de Pereira representan esa otra cara de las redes de trata, la de solapar el esclavismo, esconderlo tras un porqué: porque debes pagarme esa deuda, porque te estoy ayudando a superarte, porque no tienes papeles y debes darme algo a cambio de mi protección... Otras redes, como la de Barberena, como muchas otras redes con ese poder intermedio, esa corrupción local, ese armamento mínimo, que abundan en Centroamérica, prefieren el mecanismo más barato para conseguir que sus víctimas hagan lo que les ordenen: puño, garrote, fuego, miedo.

Silvia Saravia, la jefa del equipo que atiende a las sobrevivientes de trata antes de permitir que la Fiscalía salvadoreña las prepare para juicio, ha visto decenas de casos de mujeres que se enfrentaron a esa modalidad cavernícola de redes más locales. De ellas, dice lo siguiente:

—Las que han estado encerradas tienen temor extremo, miedo tremendo por ellas y por su familia, que sufran las consecuencias de su escape. Bloqueo emocional, están totalmente encerradas. Muchas requerirán atención siquiátrica. Ideas suicidas, ideas de desaparecer, persecución. Creen que no pueden confiar en nadie. Saben que las personas no están jugando, saben que el victimario va a cumplir... Trastornos de ansiedad, se les quita el sueño, el hambre... Grecia, por ejemplo, ella tendrá que recibir... —piensa unos segundos— Todo un proceso de atención integral.

Tras casi tres meses de ser obligada a atender clientes en La Quebradita, una semana después de ver arder en llamas a Sonia, luego de que su tía depositara \$3,500 como rescate, Grecia fue liberada por Omega. Le entregaron 300 pesos (unos \$25), la dejaron en la terminal de buses de Reynosa y le ordenaron que se fuera lejos. Una de las fiscales que entrevistó a Grecia durante el proceso asegura que ella les contó que algo raro ocurría en esos momentos, y que el grupo de zetas parecía desmontar las casas de secuestros y emprender huida. Con 300 pesos, Grecia solo consiguió comprar un boleto hacia Monterrey, y descender unos 200 kilómetros en el mapa mexicano. Ahí, Grecia relató que fue un taxista quien se interesó por su situación, le preguntó si era indocumentada y la llevó hasta la oficina de atención al inmigrante, un albergue estatal, donde la encargada de la casa supo leer los síntomas de Grecia. A esa casa, según la revisión médica que le realizaron, Grecia llegó con infección vaginal y enfermedad inflamatoria pélvica.

A salvo

Pregunta uno de los fiscales. Contesta Grecia.

—¿Qué pasa en atención al inmigrante?

—Al ver mi comportamiento, la encargada de la casa, al ver que lloraba, gritaba, no me veía normal, comenzó a preguntar. Poco a poco le fui diciendo... Me buscaron una casa albergue con el arzobispado, especial para personas que han pasado por el delito de trata... Me proporcionaron sicólogo... Me trasladaron de Monterrey al Distrito Federal... Por cinco meses fue asistida por tratamiento psicológico y jurídico.

—¿Participó en una investigación?

—Sí. Todo el tiempo que estuve ahí.

—¿Hubo personas detenidas?

—Sí, por secuestro y trata de personas. Me enseñaron unas fotos, y son aproximadamente de diez a doce personas entre hondureños y mexicanos (los detenidos).

El 23 de noviembre de 2009, Grecia ya estaba en Ciudad de México, en manos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). Según el expediente fiscal, en la primera sesión de atención psicológica se mostró “deprimida, desconfiada y con imposibilidad del llanto”. Fueron necesarias 11 sesiones para conseguir su declaración. Gracias a lo que Grecia le dijo a las autoridades mexicanas, en 2009 se realizaron allanamientos a varias casas en Reynosa y se capturó a 12 presuntos integrantes de Los Zetas que

operaban bandas de secuestros. El proceso en contra de esos hombres aún no termina, al igual que las secuelas de Grecia.

Cuando en diciembre de 2009 Grecia regresó a El Salvador, su situación empeoró. Grecia explicó que Ovidio, tal como ella temía, había amenazado a su suegra y a su madre. En el peritaje psicológico que le fue realizado por el Instituto de Medicina Legal de El Salvador, se registró que Grecia “no puede dormir por las noches, cualquier ruido siente que son balazos, ha pasado sin comer hasta dos o tres días, al encender leña recuerda a Sonia, el apetito sexual se le ha quitado, empuja a su pareja cuando tienen relaciones”.

El informe concluye con una ficha resumen:

Pensamiento: depresivo, ansioso.

Orientación: en su declaración asegura que hay vacíos porque no recuerda eventos. Lagunas mentales.

Nivel de funcionamiento psicológico actual: neurótico.

El miércoles 26 de mayo de 2010, una mujer salvadoreña de 29 años vio en un diario la fotografía de alguien que le parecía conocido bajando de un pick up esposado a otros dos hombres. La Policía había detenido la noche anterior en el parqueo de la discoteca Kairo's, sobre el boulevard de Los Héroes, a un hombre gordo, a un mexicano, a cuatro salvadoreños y a una salvadoreña en una camioneta todoterreno negra con placas guatemaltecas. Al interior de la camioneta, en un compartimento secreto que se abría con interruptor eléctrico, la Policía encontró un fusil Galil, dos M-16, una carabina 30.30, dos escopetas, un revólver, una granada de iluminación de uso militar y 11 celulares. La mujer de 29 años creyó conocer al hombre gordo de la foto, pero intentó no pensar en ello durante el día. Por la noche de ese miércoles, el hombre gordo volvió a aparecer en todos los noticieros, incluso dijo algunas palabras y se escuchó su voz chillona. La mujer no pudo obviar más que ella conocía al hombre gordo. Lo conocía muy bien. La mujer era Grecia y el hombre gordo, Omega.

El verdadero nombre de Omega es Enrique Jaramillo Aguilar, tiene 35 años, nació en Apatzingán, Michoacán, México, y en diciembre de 2011 fue condenado a nueve años de prisión en El Salvador por el delito de tenencia y portación de armas de guerra y documentación falsa. Ahora mismo está encerrado en el penal de Apanteos. Jaramillo se identificó como guatemalteco ante las autoridades salvadoreñas y mostró un documento falso. Su arresto aquel miércoles 26 de mayo fue el resultado de un operativo policial que lo ligaba a Los Zetas. La alerta saltó

cuando la Policía, gracias a un informante, se enteró de que el falso guatemalteco estaba ligado a la masacre de Agua Zarca en Huehuetenango, frontera con México, en noviembre de 2008, cuando presuntos miembros guatemaltecos del cártel de Sinaloa y Los Zetas se enfrentaron durante varias horas y dejaron 19 cadáveres regados en esa aldea. Aquel aún es recordado como uno de los eventos más importantes que evidenció la penetración de los grandes grupos mexicanos en Guatemala. Jaramillo fue arrestado acusado de ser uno de los zetas que participó, pero el Ministerio Público guatemalteco no consiguió probarlo ante un juez.

Grecia, al reconocer al hombre que asegura la violó en Reynosa, la vendió en La Quebradita, y cobró los 3,500 dólares a su tía, decidió denunciar ante la Fiscalía salvadoreña. Entonces, empezó el periplo de Grecia que la llevó a dar el testimonio adelantado ante un juez, dos fiscales, dos abogados defensores contratados por Jaramillo, y el mismo Jaramillo. Grecia pidió rendir declaración anticipada pues no quería enfrentar todo el proceso judicial en el país. Sentía terror de que Omega enviara gente a lastimarla. Luego de eso, Grecia, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, salió del país hacia alguno que no será revelado, obtuvo una nueva identidad e intenta rehacer su vida.

La hora de la verdad?

Miércoles 4 de julio de 2012. Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador. 8:30 de la mañana. Alegatos finales en contra de los acusados Enrique Jaramillo Aguilar y Jesús Ovidio Guardado.

Jaramillo espera junto a Ovidio afuera de la sala. A Jaramillo le cuelgan los pellejos en la papada. Ha perdido mucho peso desde aquellas fotografías cuando fue detenido en la discoteca Kairo's. Ha perdido pelo también. Lo lleva al rape en los lados e irregular arriba, como si en lugar de cortárselo se lo hubieran arrancado. Viste una polo de rayas horizontales grises y rosadas y un jeans roto en la rodilla izquierda. Va esposado de muñecas y tobillos. Ovidio luce aún más desgarrado, más consumido, luego de un año de haber sido arrestado. La camisa blanca de botones y el pantalón caqui de tela le quedan sobrados.

Adentro de la sala, los dos abogados privados que contrató Jaramillo restan cualquier solemnidad a lo que va a ocurrir en la sala. Bromean sobre un supuesto intento de suicidio que Grecia vivió en su adolescencia.

—200 pastillas dicen que se tomó, era narcótica —dice uno al otro con desparpajo.

—No, lo que me pregunto es dónde putas le cupieron —responde su colega. Ríen a carcajadas.

Luego, el primero pone en su teléfono celular un reggaeton al volumen que el aparato da. El secretario del tribunal le pide que por favor salga de la sala.

Las dos fiscales hacen su alegato final: Ovidio la vendió en la línea del tren... bar La Quebradita... Es tratada como mercancía... Jaramillo la violó constantemente... Tatuaje en su pierna derecha... La perito dijo que el daño de la víctima fue a causa de lo que pasó en México... Para Ovidio, violación en grado de tentativa y trata agravada... Para Jaramillo, violación continuada y trata agravada... Máxima pena en ambos casos.

Los abogados de Jaramillo contestan: ¿Que es de Los Zetas? ¿Dónde dice eso?... Inventos... El peritaje habla de lagunas mentales... La víctima dice una cosa y luego otra... Es una persona inestable... Su niño de siete años se viste de mujer... Que su niño saliera con esas cosas anormales no es por lo que dice que le pasó... Una víctima que no merece credibilidad.

Luego la abogada pública de Ovidio: el delito en grado de tentativa ni existe. ¿Hay penetración o no hay? No se configura.

Luego, sorprendentemente, pide la palabra Jaramillo. Con su voz chillona le llama “mi señoría” al juez y da sus argumentos para excusarse. El primero intenta hacer ver que Ovidio es demasiado viejo para andar en eso de la migración. El segundo, es un tanto confuso. Habla de que Grecia dijo que Ovidio solo tenía cinco dientes, pero cuando le preguntaron si sabía cuántos debía tener un ser humano dijo que sí, que 36. “Y hasta donde yo sé, son 32”. En el tercero asegura que él no vive en Reynosa, ni conoce a nadie de por ahí, que es de otro estado, de Michoacán (sin embargo, el expediente de antecedentes que enviaron desde México asegura que él es prófugo desde 2006 en el Estado al que pertenece Reynosa, Tamaulipas, por daño en propiedad ajena). El cuarto reza que él no ha sido militar nunca, y que Los Zetas son militares, que ha oído canciones que dicen que Los Zetas son 30 y que él no es uno de ellos.

El veredicto

Viernes 6 de julio. Lectura del fallo judicial.

Absueltos.

El juez Roger Rufino Paz Díaz ha considerado que Grecia se contradijo. La causa principal es una versión distinta que Grecia dio a la Fiscalía salvadoreña y a la mexicana. Allá omitió incluir a Ovidio en la trama, y dijo haber sido vendida a Los

Zetas por personas vinculadas a un albergue en Veracruz. Las fiscales del caso aseguran que Grecia hizo eso porque sabía que Ovidio estaba en el país, conocía a su familia y vivía muy cerca de su madre. Grecia, dicen las fiscales, temía que al denunciar a Ovidio en México, se informaría a las autoridades salvadoreñas, y al enterarse, Ovidio podía dañar a su familia. Por eso, lo borró de la historia cuando estuvo allá, y solo fue capaz de incluirlo cuando, ya en El Salvador, pudo constatar que su familia estaba bien y advertirles sobre el riesgo. Las fiscales explican que el peritaje psicológico de Grecia da argumentos que hacen creíble esa versión. Grecia, como dijeron los que la evaluaron, temía. Temía mucho.

La Fiscalía, en voz de la jefa de la unidad de trata, Smirna de Calles, montó ese mismo día una conferencia de prensa. Lamentó el fallo, explicó que las víctimas de este delito lidian con sus traumas y fantasmas a la vez que declaran. Aseguró que en ese mismo momento preparaban el recurso de revisión, para que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida. El recurso aún no ha sido resuelto.

Grecia no volverá a declarar. Ni siquiera la Fiscalía sabe dónde está. Ella sobrevive en algún lugar.

Esclavos del narco: Esclavos especializados



Es 25 de enero de 2009, y el ingeniero José Antonio Robledo Fernández habla por teléfono con su novia, mientras se estaciona frente a un servicio de autopartes en Monclava, Coahuila. Es originario de la capital mexicana, pero radica desde hace meses en esta ciudad nortea, donde labora para la empresa constructora ICA Flour Daniel.

José Antonio habla un perfecto inglés y tiene experiencia en encarpetado e instalación de antenas, aunque por el momento su responsabilidad es vigilar a las firmas subcontratadas por ICA en este municipio.

Trabajar en Monclava es una oportunidad para reunir dinero y poder casarse. Ignora sus peligros. Ignora que Los Zetas cobra aquí el llamado “derecho de piso” a la empresa que lo ha contratado, y desconoce, también, que algunos de sus compañeros de trabajo son, en realidad, agentes del grupo delictivo.

Después de estacionar su Xtrail modelo 2004, José Antonio es abordado por tres hombres armados.

–¿Con quién trabaja? –pregunta uno.

–Con ICA –responde el ingeniero civil.

–Dame las llaves y súbete –le ordenan.

La llamada telefónica que José Antonio sostenía no se corta y su novia escucha, además de esta conversación, los golpes que le propinan.

Tres años y diez meses después, aún se ignora su paradero.

El ingeniero José Antonio Robledo Fernández es uno de los 36 profesionistas y técnicos que, en los últimos cuatro años, han sido raptados por el crimen organizado no ya con fines extorsivos, sino para someter a las víctimas a trabajos forzosos.

"No es casual"

Tan sólo durante 2011, la Comisión de Seguridad del Senado mexicano tomó conocimiento de una decena de estos casos, empezando el de Alejandro Alfonso Moreno Baca, un joven de 34 años, ingeniero en sistemas, que desapareció el 27 de

enero, cuando conducía por la autopista de cuota Monterrey-Nuevo Laredo; luego, diez más fueron documentados.

"El que hayan estado desapareciendo personas capacitadas en esas áreas no es algo casual ni accidental –advierde Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado y miembro de la de Defensa Nacional entre septiembre de 2006 y agosto de 2012, justo el periodo en el que se decretó la guerra del gobierno mexicano contra la delincuencia organizada–; yo lo expresé en distintas reuniones de seguridad, cuando el Ejército y la Marina empezaron a descubrir antenas y sistemas muy sofisticados; estoy seguro de que esos especialistas desaparecidos fueron obligados a desarrollar esa infraestructura."

Efectivamente, en septiembre del año pasado, el Ejército desmanteló una red de telecomunicaciones del crimen organizado en Jalisco y otra en Coahuila, mientras que la Marina desarticuló una más en Veracruz, con 13 antenas activas, aunque el descubrimiento más significativo vino casi un año después de la desaparición de ^[CBI] Alejandro Moreno Baca, el 12 de diciembre de 2011, cuando el Ejército descubrió una red clandestina de radiocomunicación al servicio del cártel de Los Zetas, con estaciones en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y que constaba de 167 antenas y 155 repetidoras, que enlazaban mil 450 radios, mil 300 celulares, mil 350 aparatos Nextel, todo controlado a través de 70 computadoras.

Las antenas estaban instaladas en cerros y elevaciones de difícil acceso en la zona noreste del país, en algunos casos en puntos hallados a cinco días de marcha a pie, y se abastecían de energía a través de paneles solares.

En lo que va de 2012, las Fuerzas Armadas han destruido instalaciones clandestinas de telecomunicación en Sonora (siete antenas y 20 repetidoras), Chihuahua (una antena y una repetidora) y, en agosto reciente, en Veracruz (13 antenas), Tamaulipas (dos antenas y una repetidora), así como en la carretera Monterrey Nuevo-Laredo, la misma donde fue raptado el ingeniero Moreno Baca (donde se descubrió una antena de 50 metros y una repetidora).

En total, suman más de 400 las antenas y repetidoras desmanteladas por las autoridades.

El senador Felipe González, que fungió como secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, durante todo el sexenio de guerra contra el narcotráfico, y quién también presidió la de Seguridad contra el Terrorismo del Parlamento Latinoamericano, abunda: "No veo yo cómo iba a ser algo casual (la desaparición de técnicos). Por ejemplo, ninguno de los ingenieros en sistemas desaparecidos ha sido hallado, pero el año pasado hombres armados detuvieron un autobús de pasajeros y obligaron a bajar a dos personas que dijeron trabajar en una empresa

de sistemas; el problema es que no eran técnicos, sino cobradores, y ellos sí aparecieron rápidamente, aunque asesinados".

Más, y más, y más

En el año 2010, familias de víctimas de desaparición provenientes de todo el país crearon la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), que ha documentado, entre enero de 2007 y julio de 2012, un total de 256 personas desaparecidas involuntariamente en dicha entidad.

No se trata, sin embargo, de todas las víctimas reportadas en el estado, sino únicamente de aquellas que fueron secuestradas sin que se solicitara rescate y que no contaban con antecedentes penales o vínculos con la delincuencia organizada, es decir, "ciudadanos inocentes".

En 2011, y ante la reiterada denuncia de casos en otras entidades de la república, Fundec se convirtió en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), que desde entonces ha tomado registro, además de las 256 víctimas de Coahuila, de 80 casos más en otros puntos del país.

De estos casos, se informó, 25% corresponde a profesionistas y el resto a empleados, comerciantes y obreros, todos en edad productiva.

Además del caso del ingeniero José Antonio Robledo, Fundec tiene documentadas, entre otras, las desapariciones involuntarias de la ingeniera industrial Dora Elba Solís Parrilla; de la mercadóloga Martha Dene Guerrero Guevara; del ejecutivo bancario Dan Jeremeel Fernández Morán (desaparecido por militares que, tras ser detenidos, fueron asesinados por un comando armado que ingresó a instalaciones judiciales para ejecutarlos, así como para liberar a nueve integrantes del Cártel del Golfo); del estudiante del Tecnológico de Saltillo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo y de su padre; de los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros (cuyo rapto motivó al Senado a aprobar un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales a apoyar en su búsqueda); del agente importador Víctor Adrián Rodríguez Moreno, así como del profesor de biología Javier Burciaga Vázquez y, diez meses después, de su hermano Luis Carlos.

Por otra parte, familiares de otros 25 profesionistas han reportado su rapto a manos de comandos armados lo mismo en Veracruz que en Colima, Guadalajara, Nuevo León y Zacatecas. Son arquitectos, ingenieros, técnicos de Pemex, especialistas financieros, médicos, abogados, de cuya desaparición reconoce tener noticia Nelly Montealegre, fiscal federal para la Trata de Personas, "por notas que se han publicado", aunque, con una sonrisa inocente, la joven funcionaria también admite no contar con una sola investigación al respecto.

Deben buscarlos vivos

El 27 de enero de 2011, Alfonso Moreno Baca salió de la Ciudad de México a bordo de su Mazda rojo, en un viaje de paseo que concluiría en Laredo, Texas, donde tenía pensado visitar a un amigo.

Poco antes de llegar a su destino, en el kilómetro 13 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, pasando la caseta de Sabinas Hidalgo, fue detenido por un retén de sicarios, integrantes de una célula de Los Zetas que operó en esa zona entre 2007 y 2011, y que finalmente el año pasado fue abatida por el Ejército.

"No es dinero lo que querían, nunca se comunicaron con nosotros para pedirnos un rescate –dice Lucía Baca, mamá de Alejandro–; entonces, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿para qué se los llevan?, ¿por qué se los llevan? Debe haber una lógica: ¡¿por qué, para qué?! Todos son jóvenes, y la autoridad los busca muertos, en fosas, cuando deberían buscarlos vivos..."

Lucía habla mientras sostiene entre sus manos la ficha de búsqueda con el retrato de Alejandro, quien al ser raptado tenía ya cuatro años de laborar en IBM-México. A su lado, Alfonso, padre del ingeniero, extiende los mapas con las coordenadas por donde pasó su hijo el último día en el que se tuvo noticia de él, los reportes de actividad de su teléfono celular y las fotografías de otras víctimas de desaparición en ese punto carretero.

"Entre 2007 y octubre de 2011, en esa zona fueron desaparecidas al menos 16 personas –dice Alfonso–; conocemos casos de víctimas que venían de Monterrey, de Jalisco, de Guanajuato, todos jóvenes; son Míriam, Perfecto, Andrés, Braulio, Ismael y varios más, todos desaparecidos al pasar la caseta de Sabinas Hidalgo y en ningún caso se solicitó rescate".

De hecho, la asociación civil neoleonesa Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) calcula que, sólo durante 2011, en la entidad desaparecieron cerca de 800 personas, 200 de las cuales fueron raptadas en carreteras estatales. De ellos, reporta la organización encabezada por la hermana Consuelo Morales

(premiada en 2011 por Human Rights Watch), 65% fue secuestrado por integrantes del crimen organizado y el resto por policías, marinos y militares.

Tres días después del secuestro de Alejandro, sus padres llegaron a la ciudad de Monterrey para comenzar su búsqueda y fue en las oficinas de la Policía Federal donde [00] "nos dijeron que no nos preocupáramos, 'a su hijo se los devuelven en tres meses, y del carro ni se apuren, en alguna ranchería va a aparecer...', nos dijo el oficial en turno, así, con ese cinismo, y ahí nos dimos cuenta del tamaño de la corrupción que hay en el estado... en fechas posteriores volvimos, sólo para enterarnos de que toda la policía municipal de Sabinas, empezando por el que era su comandante, brindaban protección a la delincuencia organizada y, de hecho, quien era su titular hoy está en la cárcel". Además de Alejandro, en el tramo carretero de Sabinas fue raptado, también en enero del año pasado, otro técnico en sistemas, una profesora, dos deportistas y un estudiante de relaciones internacionales, entre otros, "y en Nuevo Laredo también se investiga el secuestro de dos técnicos en sistemas que fueron extraídos de sus viviendas, y el común denominador es que todos tienen una edad de entre 20 y 40 años, son lo mismo hombres y mujeres. A los que son ingenieros o técnicos en sistemas los pondrán a trabajar en sus redes de comunicaciones, y a los que son especialistas en otras áreas los tendrán en otras labores... pero ésa es nuestra esperanza, que ellos siguen vivos, que los tienen trabajando bajo la consigna de obedecer o morir; y vivos hay que buscarlos".

En octubre del año pasado, el Ejército atacó el campamento que la célula de Los Zetas mantuvo por al menos cuatro años en Sabinas, en un momento en el que se hallaban 200 personas en el lugar; sin embargo, sólo se reportó que 22 sicarios fueron abatidos y el resto abandonó el sitio durante la refriega, a través de caminos serranos. Se ignora si entre ellos había gente retenida contra su voluntad.

"Si se dice que en ese narcocampamento había 200 personas, y los militares mataron a 22, ¿dónde están los otros 178? ¿Por qué no los alcanzaron, quiénes eran, dónde quedaron?", pregunta el padre de Alejandro.

Nueve...

La cuenta de técnicos secuestrados por el crimen organizado puede rastrearse hasta 2009, año en el que un grupo de nueve personas contratadas para instalar antenas de radiotelefonía en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue raptado por hombres armados que, al día siguiente, volvieron por los vehículos y las herramientas de trabajo de las víctimas, de quienes no se ha vuelto a tener pista desde entonces.

Sus nombres son Julio César Ochoa Romo, Víctor Romero, José Hugo Camacho Fierro, Marcelino Moreno Leal, los hermanos Carlos y Ricardo Peña Mejía,

Constantino García Jiménez, Roberto Gutiérrez Medina y Eduardo Toyota, todos vecinos de Guasave, Sinaloa, y algunos con hasta diez años de experiencia en montaje de equipos de microondas.

Ellos tenían dos semanas de haber llegado a la ciudad fronteriza, con un contrato por seis meses, y habían arrendado un departamento hasta el cual, el 19 de junio, a la medianoche, arribó un grupo de hombres con uniformes negros y encapuchados, a bordo de varias camionetas oscuras que, según las declaraciones de los vecinos, los extrajo a punta de pistola. Horas después, los captores volvieron por el instrumental de trabajo de los técnicos.

Por este caso, el 1 de diciembre de 2009 el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales (particularmente a las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de la República) a que "se realicen las tareas necesarias para coadyuvar con dependencias locales y municipales en materia de seguridad pública del estado de Tamaulipas, en las [OBJ] investigaciones que conlleven a la pronta localización de los nueve sinaloenses desaparecidos en Nuevo Laredo".

Todos ellos, señaló en la exposición de motivos el senador Mario López Valdez, habían recibido la advertencia "de no entrar al territorio de Nuevo Laredo, por la inseguridad que priva en ese lugar y por su identidad de sinaloenses, debido a que, según comentarios, no eran queridos ni bien recibidos". Por esa razón, dijo, en nombre de los familiares de las víctimas, "recurso a la máxima tribuna de este país, para que se atienda la petición de unos mexicanos que, como todos nosotros en su situación, se encuentran sumamente afligidos por la incertidumbre y la pesadez de los momentos por los que están pasando".

Las investigaciones, sin embargo, no han arrojado fruto alguno. De hecho, el pasado 9 de mayo de 2012 –en el marco de una reunión de 150 familiares de personas desaparecidas en todo el país, que se congregaron en la Ciudad de México para conmemorar el Día de las Madres con la exigencia de justicia para sus hijos, padres, hermanos y hermanas ausentes–, Gabriela Peña Mejía, hermana de dos de los técnicos desaparecidos, aseguró que, a pesar de que la PGR ha comparado el ADN de los nueve guasavenses desaparecidos con los restos encontrados en narcofosas de Tamaulipas durante los últimos tres años, ninguno de ellos ha sido encontrado, lo que alimenta la esperanza de que sigan con vida.

"Les estorban"

Es 27 de enero de 2009, han pasado 48 horas desde el secuestro del ingeniero José Antonio Robledo, y sus padres, Guadalupe Fernández y José Antonio Robledo Chavarría, ya han presentado denuncias en la capital de Coahuila y en el municipio

de Monclova. Tres días más tarde lo harán también ante la Procuraduría General de la República.

El trato en cada oficina de gobierno es el mismo. "Hay mucha ineficiencia y apatía de las autoridades –dice Guadalupe–; en Monclova, incluso la agente del Ministerio Público nos da a entender que poco le importa la suerte de mi hijo".

Pese a ello, en esos primeros días desde el secuestro, ahí están, "con la esperanza de regresar con nuestro hijo".

Confían en que se trata de un plagio típico, creen que en cualquier momento recibirán una llamada exigiendo el pago de rescate, y esperan. Sin embargo, recuerda Guadalupe, llega un momento en el que, de forma abrupta, tenemos que salir de Monclova, el 5 de febrero de 2009, cuando los visita en su hotel Joaquín Benito del Ángel, jefe de seguridad de ICA en dicho municipio, acompañado por dos sujetos que afirman ser integrantes de Los Zetas en la región.

"Nos dijeron que no fuéramos a la policía (al día siguiente teníamos pactada una entrevista con el entonces subprocurador de Justicia del estado, Jesús Torres Charles), que ellos estaban controlando a la policía ministerial tanto en Monclova como en Saltillo, que ellos nos iban a ayudar y que el contacto sería el jefe de seguridad de ICA –narra Guadalupe–. Ellos tenían información de todo lo que habíamos ya tramitado ante las autoridades; estuvimos hablando como 15 minutos con esos hombres, y en cuanto terminó la plática y ellos se retiraron, nosotros salimos huyendo del hotel y nos fuimos directamente a Saltillo para ver al subprocurador Torres Charles, al que le contamos todo; estábamos muy espantados, pero él se negó a que esa información fuera agregada a la denuncia de secuestro: 'corre peligro la vida de su hijo, no lo arriesguen', nos decía".

Don José, papá del ingeniero desaparecido, reflexiona: "En algunos momentos nos hemos dado de frentazos mi esposa y yo, pensando que tal vez hubiera sido mejor negociar con ellos, con los delincuentes, en vez de querer hacer las cosas por la vía legal, por la vía institucional... Torres Charles llegó a ser fiscal general del estado y asesor jurídico del actual gobernador Rubén Moreira (PRI), y en febrero de 2012 fue separado de la administración pública al saberse que su hermano, Humberto Torres Charles, agente de la Fiscalía General de Coahuila, recibía 300 mil pesos mensuales del crimen organizado a cambio de brindarles protección".

Actualmente, la PGR ofrece una recompensa de tres millones de pesos a quien proporcione información que lleve a la captura del Humberto Torres Charles, mientras que mantiene presa y sometida a juicio a Claudia González López, exdelegada de esa misma institución federal en Coahuila, por sus presuntos vínculos con Los Zetas. "En la PGR nos dijeron que había otros empleados de ICA

desaparecidos –señala Guadalupe–; se trata de cinco ingenieros; y en 2011 se nos acercó la familia de un soldador argonero, raptado también en Monclova, y también empleado de ICA Fluor Daniel; pero luego no pudimos mantener el contacto, la familia tiene mucho miedo; sabemos de otro caso de un ingeniero de ICA secuestrado en Michoacán, y en la empresa nos informaron que, antes de mi hijo, otro técnico ya había sido desaparecido".

–¿Qué papel ha jugado ICA, les ha brindado algún apoyo?

–Nuestro hijo tenía un año y tres meses trabajando para esa empresa... ellos se lo llevaron a Monclova, y cuando desapareció, no nos dijeron nada; si nos enteramos fue porque su novia estaba hablando con él por teléfono cuando fue atacado; pero dos días después del secuestro, el 27 de enero de 2009, ICA se deslindó, nos dijeron que lo que nosotros pudiéramos o quisiéramos hacer era cosa nuestra, que la compañía se deslindaba inmediatamente... eso nos lo dijo el ingeniero Raúl Alberto Medina Peralta, jefe del proyecto Fénix, y lo único que yo acerté a decirle –recuerda Guadalupe– fue que mi hijo no había llegado solo a Coahuila, que a él lo habían traído los de esa empresa, pero que si ellos no pensaban hacer nada por él, nosotros, sus padres, sí lo haríamos...

–A partir de las investigaciones de la autoridad y las realizadas por ustedes mismos, ¿qué hipótesis han formulado sobre el motivo por el que José Antonio fue raptado?

–Sabemos que la razón no era obtener dinero de su familia –dice Guadalupe– porque nunca se comunicaron con nosotros para exigir el cobro de un rescate; también sabemos que Los Zetas sí cobraban derecho de piso a ICA, y que de no hacerlo pesaban amenazas sobre su personal; de hecho, este dinero se le entregaba a los criminales a través de dos empleados de la empresa, compañeros de trabajo de mi hijo: Joaquín Benito, jefe de seguridad, y el chofer que transportaba a José Antonio de su casa al trabajo, y en cuyo vehículo encontraron una metralleta y 148 envoltorios de cocaína. Ellos dos, así como otros tres cómplices, están hoy presos, pero se niegan a revelar qué hicieron con José Antonio. Enfrentan cargos por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro.

–También sabemos –añade don José– que uno de los detenidos era el encargado de cobrar derecho de piso a las empresas contratistas que daban servicio a ICA, y mi hijo era el que vigilaba que esas firmas cumplieran con los requisitos técnicos; entonces, pensamos que, tal vez, en algún momento les molestó que mi hijo fuera cierto obstáculo para las empresas que no cumplían los lineamientos, pero que ya habían pagado su cuota a la delincuencia organizada.

Don José endurece la mirada y mide, palabra a palabra, su respuesta, cuando se le pregunta si es posible que, dado su perfil profesional, su hijo continúe vivo, cautivo por alguna banda delictiva.

–Yo sé que mi hijo pudo serles de utilidad: hablaba un perfecto inglés y tenía experiencia en encarpetado e instalación de antenas; bien podía serles útil para crear sistemas de comunicaciones o para hacer pistas de aterrizaje clandestinas... sin embargo, el de México no es el caso de Colombia, donde los grupos armados dominan espacios geográficos en los que los delincuentes pueden mantener cautivos a sus rehenes durante largo tiempo, y con cierta tranquilidad... pero en México se da una violencia tan animal, tan agresiva, tan homicida, que aunque algunos de los desaparecidos sean inicialmente usados, empleados a la fuerza, creo que después de un tiempo les estorban; ya después de que los explotan, se vuelven un peligro... ojalá existiera esta posibilidad, de que los tuvieran trabajando en algún lado, pero creo que no es necesario para la delincuencia organizada retenerlos indefinidamente; cuando necesitan gente especializada la agarran, la usan y la desechan; y si luego vuelven a necesitar a más especialistas, pues se llevan a otros.

De esclavas y siervas: La escurridiza red de los cuerpos ocupados

Por Alejandra Gutiérrez Valdizán



Las redes de crimen organizado dedicadas a la trata de personas han tenido mucho tiempo para perfeccionar su sistema y para aliarse con nuevos actores como los narcotraficantes. Mujeres indígenas son movilizadas, por pequeñas estructuras, de las áreas rurales a la capital. Decenas, quizás cientos, de mujeres son trasladadas de otros países a Guatemala por

organizaciones grandes para tránsito o estadía. La explotación sexual, en un país que apenas empieza a reconocerla como delito, con altos índices de criminalidad y con un deficiente respeto a los derechos humanos, se encuentra en territorio perfecto.

Su cuerpo es su cuerpo

Sobra una rocola y hace falta un ataúd. En la cantina sin nombre todo es un poco lúgubre, un poco sucio, un poco triste. Un poco como un funeral. Uno de los hombres aprieta a una mujer por la cintura y se tambalean lentamente frente al aparato lleno de luces del que sale la música. No se miran uno al otro. En una silla pegada a la pared, otra mujer está sentada junto a un hombre mayor, los separa una mesa atestada de litros vacíos de cerveza. Ella hace esfuerzos por no dormirse, sus párpados se cierran por largo tiempo hasta que frunce la cara y vuelve a servir más cerveza. Sólo en el rincón hay un ambiente festivo, más botellas sobre la mesa, mientras un individuo fornido, con chaleco de guardaespaldas, se sienta junto la mujer del güipil más lujoso.

Es posible detectar a quién le va mejor en la vida por el güipil, mejor económicamente. Los bordados de estas blusas de las indígenas mayas son más ricos, más cuidados, la tela más fina. La luz aquí es escasa y las paredes sucias, descascaradas, amarillentas, están cubiertas por afiches con mujeres rubias, tetonas, altas y en bikini que promocionan cerveza. Contrastan las modelos de las fotos con las q'eqch'íes que atienden el local.

La mujer que bailaba apretada al hombre desaparece de escena. Eso sucederá toda la noche: de pronto una de las cuatro se esfuma por la única salida que da a la calle

y vuelve media hora después, con uno de los hombres. Vuelven de los hoteluchos de la vuelta de la calle.

Es la Novena avenida del centro de la Ciudad de Guatemala. Los muros sucios, rejas en las ventanas, las camionetas lanzan chorros de humo y las farolas iluminan menos.

A sólo tres calles está la remozada, iluminada y peatonal Sexta avenida, con cafés recién inaugurados, a los que las mujeres venidas de las Verapaces, en el abandonado norte del país, probablemente no vayan nunca. A tres cuadras está también el Palacio Nacional de la Cultura, la sede de Gobierno.

A la Novena avenida algunos le llaman “la Tijuanita”.

Ellas desconfían al principio, intentan disimular la sorpresa de que dos mujeres incursionen en ese espacio tácitamente dedicado a los hombres. Son ellos, los hombres, los que pagan el doble por una cerveza. Y son ellas, las mujeres, “las ficheras”, las que se quedan con una parte de ese precio. Las “ficheras”, ese nombre que reciben las camareras que ganan comisión por emborrachar a los clientes y cuya tarea implica, casi siempre, emborracharse a su lado. Llegan a tomarse hasta 24 cervezas en una noche, confesarán después. La mujer que está a punto de dormirse, desde su lugar hace un gesto de “salud”, entre parpadeo y parpadeo, arruga la cara y ríe a carcajadas. El hombre que está junto a ella sigue bebiendo en silencio. Y la que bailaba antes, ahora pasa junto nosotras. Preguntamos: “¿Quién es el dueño aquí?”

Ella con disimulo señala a los que parecen más contentos y dice: “la señora”.

El hombre del chaleco, el que está junto a “la dueña” del güipil lujoso, se acerca a la mesa de las extrañas, a nuestra mesa, y eleva la voz y finge una especie de acento foráneo, para que según él le entendamos.

–Buenas noches, señoritas. Bienvenidas a mi local-, y acto seguido su conversación intenta averiguar qué diablos hacemos allí. Le hablamos de un paseo –mentira–, de una afición a las rocolas –verdad–, de una decepción amorosa –media verdad–, de las ganas de emborracharnos –por motivos profesionales–. El hombre se convence. Se infla y asegura que éste es su negocio, ella sólo es la encargada de cuidarlo. Se sienta a nuestra mesa. Dice que tiene un BMW y que fue a la universidad, confunde el nombre y es incapaz de decir lo que estudió, criminalística, o algo así. Dice ser kaibil –la fuerza del ejército de elite, admirada por muchos y temida por muchos más–.

–¿No tiene problemas de seguridad aquí? –preguntamos con el tono con que en otros países se pregunta por el clima.

—No. ¿Y saben por qué?—dice bajando la voz— ¡A mí me pela la verga! Porque yo trabajo en la Presidencia.

Cuelga de su cuello, escondido bajo la camisa, un gafete. Lo muestra con orgullo. En él su fotografía y el logo del Gobierno. Alcanzamos a registrar su nombre. Pero lo vuelve a guardar rápidamente, lo que impide ver en qué institución.

—Una vez vino la policía y estaban tratando de extorsionarme. Entonces llamé a la ORP (la oficina de responsabilidad policial). Tengo un mi cuate con ellos. “Mirá, vos, fijate...”. Y a los diez minutos ya estaban aquí.

Es imposible, por el momento, saber cuánto es alarde y cuánto es cierto.

—Yo vengo aquí con el carro del Estado. No entro. Sólo paso a recoger el dinero.

—¿No han tenido problemas las chicas? ¿Qué algún cliente se ponga violento o que haga problemas?

—Ese es problema de ellas —responde sin pensarlo—. A mí me vale vergas. Que ellas vean cómo se salvan. Su cuerpo es su cuerpo. Su cuerpo es su cuerpo.

Sus cuerpos siguen embriagándose. Sus cuerpos se esfuman entre las cortinas para reaparecer en el cuarto de un hotel con un desconocido, por menos de cien quetzales (US\$12). Hoteles en donde no es tan raro hallar cuerpos de mujeres asesinadas sin identificar. Su cuerpo es su cuerpo.

Él sigue hablando. También es propietario de una empresa de seguridad privada.

De pronto, recibe una llamada, se levanta con prisas y se despide serio y con mucha menos amabilidad que con la que se presentó.

Quedan sólo las mujeres, una mesa con unos jóvenes que hacen malabares entre la mayoría de edad y la adolescencia, un hombre solitario de pelo cortado a ras, y otra mesa con un joven de gorra de beisbol que insiste con agresividad en sacar a bailar a todas.

Invitamos a la mujer somnolienta a acercarse a nuestra mesa. Es pequeña, casi enana. Pone en la rocola Calle 13, que rompe con varias horas de rancheras, baladas y bachata y ahora parece más despierta. Explica que llegó aquí porque una de sus compañeras la llamó. Ella trabajaba antes en servicio doméstico, pero apenas le alcanzaba para vivir y tiene tres hijos en su pueblo, tiene que enviar dinero. Ella asegura que sólo “ficherea”, no se va con los clientes. Es madre soltera. Pero no le gusta este lugar. La tratan mal, admite, mirando de reojo a la compañera más maquillada, la que bailaba más, la que desaparece con más frecuencia y que

aparenta ser la mano derecha de la encargada. Aquí no le dan comida. En otro lugar en el que estuvo sí le daban.

Duerme en la trastienda, escondida tras la barra por una cortina. (Alguien explicará después que probablemente es un espacio con colchones y petates en el suelo donde duermen todas hacinadas – quien nos lo explica, una trabajadora sexual que lidera una organización, asegura que en la zona de Tijuana, de la Novena, funciona igual en todos los locales. También nos dirá que los Q1,100 que afirman ganar de salario base son mentira, que rondan los Q800 (US\$100 al mes), menos que el salario mínimo legal de Q2,040 (US\$260)-. El redondeo del salario es a base de las fichas y sí, por “ocuparse” con los clientes. En El Salvador le dicen “ocupar” a “utilizar”; el diccionario dice: “ocupar: Tomar posesión o apoderarse de un territorio. Llenar un espacio o lugar”.

Se sientan tres a nuestra mesa, incluida la administradora o “la dueña”. Sólo la más joven, que apenas habrá cumplido la mayoría de edad, se queda tras el mueble que hace de barra y custodia las refrigeradoras con cerveza. Ahora los clientes beben solos, aunque les siguen comprando cervezas a las chicas e invitándolas a botellas que ellas traen a nuestro puesto. Intercambiamos cigarros, reunimos monedas para la música. Reímos y brindamos.

Varios litros después, se ponen serias y cuentan: todas vienen de pequeñas aldeas, todas tienen hijos allá, todas son madres solteras, no vislumbran otra posibilidad que trabajar en la cantina sin nombre, o en otro lugar similar en algún punto de la ciudad –El Trébol, La Terminal, El Cerrito, Zona 6–.

La del güipil caro se vanagloria de ser la propietaria del lugar. “La patente está a mi nombre”, dice orgullosa. Si en algún momento llega a haber un allanamiento, un problema legal, o finalmente las autoridades decidieran entrar a Tijuana, e investigar si allí hay explotación sexual, ella sería la que iría a prisión. El que dice ser el dueño, el que recoge el dinero en carro del Estado, según él, estaría tranquilo, su nombre no tiene rastro allí.

¿Qué pasa si toca ocuparse con un tipo violento, con un patán que no respete? Sonríe. “¡Es que no hay que ser tontas! ¡No hay que pensar! Se piensa en el pisto: el pisto es el pisto”. El dinero es el dinero. No hay que pensar.

Llega la policía a la Novena. Esas supervisiones que se realizan de rutina los fines de semana. Un convoy de unas doce patrullas, con las luces iluminando los herrumbrados carteles. Los policías descienden armados de la parte trasera de los picops bajo una llovizna liviana. Recorren los antros. “Ya se fueron los que venden droga”, dicen las mujeres sobre los que se dedican al narcomenudeo en las esquinas y, susurra una, también en algunas cantinas. “Aquí no pasa nada”, dice otra, “mi

primo es policía”. Y en efecto, entran dos agentes a la cantina sin nombre, dan un vistazo y se van. Y no pasa nada.

Uno de los clientes, el de pelo corto confiesa: “Yo soy policía, pero a ellos no les digo nada”, y muestra una fotografía uniformado. Ellas murmuran que hay que tener cuidado, junto a la mesa del policía, el que invita agresivo a bailar es el asaltante de la cuadra, todos saben que es el que se encarga, pistola en mano, de robar celulares por la zona.

La pequeñita asegura tener novio y nos informa que a él no le gusta que trabaje allí. Para que no la oiga la jefa, baja la voz y adelanta que se irá al día siguiente, se va a otra cantina por El Trébol, donde sí les dan comida. La encargada que hace unos minutos era altiva y decía que no hay que ser tontas y que no hay que pensar, ahora también se quiebra: llora, su esposo está preso, ella tiene que trabajar por sus hijos, que están al cuidado de su madre en Verapaz. “Mañana lo voy a ver a la cárcel”, solloza, e intenta secarse las lágrimas. La pequeñita asegura que el jefe porta pistola –nada extraño en Guatemala, un país de 14 millones de habitantes, donde se calcula que circulan más de un millón de armas de fuego, 800 mil sin registro–.

Sigue lloviendo. Nos vamos. Dejamos tras las cortinas a las mujeres, recordar a sus hijos las ha puesto tristes. Se quedan alrededor de la mesa. Los autos y la lluvia acallan la música de los otros negocios, entran parejas a los hoteluchos. El semáforo parpadea. En la cantina sin nombre ya no suena la rocola.

A ciegas en el laberinto

Parece una escena inofensiva y de tan cotidiana, normal. Las mujeres no están atadas y parecieran no estar forzadas a estar allí. No hay despliegues espectaculares de hombres armados y fuerza. El dueño de la cantina sin nombre es un solo hombre, al menos es lo que dice, y cuesta relacionarlo con redes o con el delito. Pero este individuo es uno de los nudos de micro redes del crimen. Primero, en Guatemala está penada la explotación sexual –incluido el proxenetismo-. Segundo, a partir de locales como éste se ha ido tejiendo una red de captación de mujeres que son enganchadas y retenidas –por fuerza o por la necesidad de ellas– para beneficio de terceros.

La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también llamada la Convención de Palermo define que como “grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos...”. En negocios repartidos por la ciudad capital y en zonas urbanas de toda Guatemala, se replica el sistema: captadores que buscan a las mujeres en poblaciones pequeñas –utilizan engaños, en algunos casos pagan

por ellas a sus familiares y en otros, poco documentados, las llevan por la fuerza-; los encargados del transporte, en donde se pierde el hilo con el primer captador, hasta llevarlas a estos locales en donde viven en precarias condiciones, en donde se encuentran con los “cuidadores”, casi siempre mujeres que se encargan de la administración. En otros casos el sistema es más expedito, las mismas mujeres se acercan a los locales, provenientes de las zonas rurales, empujadas por la necesidad; luego es probable que ellas mismas hagan de captadoras con las vecinas de sus poblados.

Días después de la visita a la cantina sin nombre se investigó si el supuesto propietario trabajaba en la entidad estatal que él afirmaba. Hay tres homónimos en los departamentos de la Presidencia. Sin embargo, las posibilidades de que el dueño de un solapado burdel sea el mismo que el de un funcionario público son altas. Uno de los nombres encaja con su lugar de procedencia. La empresa de seguridad privada no aparece registrada, pero eso no implica que no exista, hay 300 compañías de seguridad funcionando sin licencia del Estado.

Decenas, cientos, de cantinas con el apelativo de cevichería, chicharronería, comedor, funcionan de formas similares en toda Guatemala. En otras zonas de la ciudad, con instalaciones más lujosas, funcionan como “night clubs”, aunque para fines legales son lo mismo. Con diferentes modalidades, todos están cometiendo un delito: explotación sexual. Los métodos de coerción son variados.

Y es que las redes de trata y de explotación sexual están tejidas con hilos invisibles. El delito es difícil de detectar, lo dicen los expertos, los fiscales, los libros, lo dice la observación, las mismas víctimas a veces no saben que lo son. Encontrar las dimensiones del crimen es también complicado, imposible quizás. Han surgido alertas mundiales en los últimos años, abanderadas por Naciones Unidas, en las que se asegura que el fenómeno es gigantesco, una red de traficantes de esclavos se globaliza y miles ¿millones? de personas caen en ella. La mayoría, mujeres y menores, son transportadas entre países o en su mismo territorio, con engaños, por la fuerza, manipuladas.

Kevin Bales, autor de *La nueva esclavitud en la economía global*, señala como características fundamentales de la esclavitud moderna la ausencia de propiedad legal sobre el esclavo, el coste de adquisición bajo, la alta rentabilidad que obtiene el explotador, y el carácter temporal del abuso, pues renueva las víctimas en lugar de obtener provecho de las mismas durante décadas. Se afirma que después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas es la actividad ilegal más lucrativa del mundo.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) declaró que US\$32 mil millones (Q250 mil millones) se generan por el negocio cada año.

Bales afirma que son 27 millones de esclavos en el mundo –la mitad de ellos en la India–. Pero todo son proyecciones. El dinero tiene esa habilidad para mimetizarse con otros billetes más limpios, en sistemas bancarios sin demasiado control, especialmente si para buscar el rastro se ve de reojo y se busca sin querer encontrar. Guatemala, por ejemplo, es uno de los nueve países en el mundo en el que Hacienda no puede verificar si lo que los ciudadanos declaran que ganan es lo mismo que ingresan en su cuenta bancaria.

Esas esclavitudes tienen diferentes rostros y máscaras. No es necesario tener encadenadas a las víctimas para que éstas no puedan liberarse. Hay grilletes más pesados y perversos: la pobreza, la necesidad, la falta de oportunidades, el engaño, la violencia, el chantaje e incluso la manipulación emocional. ¿Cómo detectar y detener un delito que es como un pez bañado en mantequilla en una laguna de aceite turbio?

Lugares como la cantina sin nombre o los “night club”, en todos hay delitos; alguien está obteniendo beneficios económicos por la “utilización” del cuerpo de otra persona. Es penado por la ley. Es decir, el delito de trata incluye al de explotación sexual y es allí donde se esconden todos esos lugares que hasta hace muy poco no eran considerados ilegales. La propia normalidad con que siguen funcionando, la complicación de conseguir que las víctimas se reconozcan como tales y asuman que el patrón que las contrata y el “cliente” que paga por tener relaciones sexuales con ellas están delinquiendo; que la propia sociedad no entienda el por qué es ilegal que alguien utilice el cuerpo del otro para su propio beneficio; complican mucho más la persecución y las redes se fortalecen. Sí, en estos lugares ellas pueden salir y entrar, parecería que están por propia voluntad, pero se desconoce el hecho de que esa voluntad probablemente ha sido doblegada por otras circunstancias ajenas a estos espacios de rocolas y espejos.

En Guatemala, en 2009, la Comisión Nacional de la Adolescencia y la Niñez (institución coordinada por entes estatales en las que participan oenegés) calculaba que unos 15 mil niños, adolescentes y jóvenes eran víctimas de trata en el país. Pero es una cifra cuyo sustento estadístico no está claro –dados los datos del Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público (MP)–. Activistas que se encargan de dar resguardo a víctimas dicen que el asunto es más grave y que las instituciones de seguridad y justicia no tienen una panorámica correcta.

Leonel Dubón, director de la oenegé Casa Alianza y fundador del hogar Refugio de la Niñez –que se especializan en dar acogida a víctimas de violencia sexual y trata–, tiene registrados 120 casos de trata en el año y asegura que hay regiones del país –las Verapaces, en especial– en que se detectan casos de mujeres desaparecidas con mucha más frecuencia que las que las autoridades registran.

Alexander Colop, el abogado que dirige la fiscalía de trata del Ministerio Público (MP), no se arriesga a dar datos. El sistema que hasta ahora se utiliza en el MP no diferencia las diversas modalidades de trata –adopción irregular, explotación sexual o laboral–. Colop evita hacer proyecciones del fenómeno, se rige por las denuncias e investigaciones que ingresan al MP. “Se escucha, se habla de historias, (pero) el no tener estudios puede generar información que no sea real”, dice el fiscal. En lo que va del 2012 -hasta agosto-, el MP ha registrado 446 denuncias por este delito, mientras que el Ministerio de Gobernación tenía contabilizados a julio de este año 80. Colop reconoce la deficiencia del control de estadísticas y asegura que el MP está implementando un nuevo sistema que permita llevar un registro certero.

El MP, el Mingob y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentan informes dispares. En 2009 con la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, se instituyó la Secretaría contra la Violencia, Explotación Sexual y Trata de personas (Svet) –ente de la Vicepresidencia-. Sin embargo, fue hasta agosto de este año –tres años después de su formación- con la visita de Najat Maalla M'jid, la Relatora de Naciones Unidas ONU sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, que la Svet entregó un informe y firmó un acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones para hacer monitoreos –tarea incumplida desde 2009-. Una de las conclusiones de la relatora fue la imposibilidad de tener un diagnóstico adecuado –en referencia a la trata infantil- “debido a lo contrastantes que le resultan los datos de las distintas instituciones”. M'jidencontró que las instituciones gubernamentales no tienen definidos sus roles en cuanto a la trata infantil y que eso impide una fiscalización de sus obligaciones. Su conclusión se puede extrapolar a la trata de adultos.

La ley penaliza la “promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución”; es decir, prohíbe el proxenetismo a extremos de rigurosidad como el de Suecia. No obstante, hay una especie de acuerdo tácito entre instituciones –la policía y las municipalidades, por ejemplo–, en el que si no hay denuncias, la explotación sexual sigue funcionando sin que haya demasiadas acciones que persigan de oficio el delito.

Hay muchas instituciones estatales, secretarías, departamentos de los ministerios, involucrados en la prevención, en la protección y en la persecución, pero da la impresión de que funcionan de forma aislada unas de otras y que más bien se encargan de apagar fuegos, sin que se descubran las cabezas y las raíces.

Hasta hace unos meses, a pesar de la ley, las trabajadoras sexuales estaban obligadas a portar una tarjeta de salud que las etiquetaba como tales y que garantizaba que no padecían de alguna enfermedad de transmisión sexual. Por un lado se daba alguna protección sanitaria a las mujeres, pero implicaba que el

Ministerio de Salud indirectamente certificaba a las mujeres para tranquilidad de un cliente o un patrón, que si se cumpliera la ley, serían delincuentes.

Un doble rasero en el que el Estado por un lado criminaliza, pero por otro deja estar. Y que, también, abandona en una calle oscura y desolada, en total vulnerabilidad, a las mujeres que por opción personal deciden prestar servicios sexuales.

Las cifras no coinciden entre instituciones cuyas responsabilidades se entrecruzan confundiendo a los desinformados. Esfuerzos evidentes en otros espacios –la Fiscalía, el Ministerio de Gobernación- al final son acciones asiladas. Con tareas pendientes en todos los aspectos de los derechos humanos, a ciegas, con contradicciones, el Estado intenta proteger a las mujeres. Pero el esfuerzo no alcanza y las continuas zancadillas que el Estado se da a sí mismo y que le da el crimen organizado siguen ensañándose contra las más vulnerables.

La vida no tan alegre

Carolina está cansada. A Carolina le faltan dientes. Tiene la piel manchada y el pelo revuelto en un moño. Tiene los ojos color caramelo. Trae un bebé sujeto a la espalda. Estuvo haciendo cola en el centro de salud por varias horas. Hoy encuentra refugio en esta casa iluminada con techos altos y paredes blancas.

En un salón amplio, las trabajadoras sexuales aprenden a hacer artesanías y bisutería. Reciben cursos de salud sexual y hacen terapias psicológicas y de autoestima. Se escucha en uno de los salones a la capacitadora: “su cuerpo es su cuerpo”. Les plantean el trabajo sexual como una opción que deben tomar ellas y que han de ser conscientes de que nadie tiene derecho a explotarlas. Les hacen ver que tienen otras elecciones y que ellas deben decidir. Por la Organización de Mujeres en Superación (OMES) pasan decenas de mujeres, muchas de ellas mayores de cincuenta y sesenta años. Yanira Tobar, la directora de OMES, explica que de vez en cuando llega una anciana de 84 años que se sigue prostituyendo en La Terminal.

Tobar es trabajadora sexual. La clave para ella es “la dignidad”, la decisión propia. Pero, ella misma lo reconoce: es complicado dilucidar cuándo es una decisión propia y cuándo son las circunstancias, la pobreza, los tratantes manipuladores, o el mismo sistema el que las obliga a ejercer el oficio.

Carolina acepta hablar y dar la cara para las fotos. Prefiere que se publique su nombre de “rol”. Su verdadero nombre es un juego de palabras hermoso, pero muy poca gente lo conoce: ha pasado demasiado tiempo siendo Carolina.

Ella nació en San Vicente, en El Salvador. A su padre nunca lo conoció, su madre murió cuando ella tenía nueve años. Se crió con sus abuelos hasta que ellos murieron y se fue a vivir con su tía. A los 14 años la tía la trajo a Guatemala, le dijo que trabajaría como empleada doméstica en una casa.

“Yo llegué allí y la noche que mi tía me llevó, la señora de la casa me puso a lavar una pila llena de trastes. Que lavara, me dijo, y después me fuera a un cuartito y que allí estaba la ropa que iba a usar. Le dije: ¿para dormir? Y ella me dijo: No, ¿tu tía no te comentó algo de lo que ibas a hacer aquí? Esto es un prostíbulo. Yo, gracias a Dios, estudié a tercero básico y entendía el significado de las palabras. Yo no he trabajado así. No lo has hecho, pero aquí lo vas a comenzar a hacer. Yo tengo miedo, no se nada de eso. Vas a empezar y después ya vas a ver como de repente hasta te va a gustar. Me bañé y me dio una toalla. En el ropero está un par de zapatos que te vas a poner, me había dicho. Cuando abrí el ropero estaba un hombre allí, era un hombre ya grande, yo me asusté. Vine a sacar unos zapatos. No vas a encontrar zapatos, me dijo. Quitate la toalla yo voy a ser tu primer cliente. Pero si el consumismo está allá afuera. Vos aquí venís a putear, me dijo. Empecé a temblar. Ya estaba bajo efectos del licor, se le sentía el aliento. Si no lo querés por las buenas lo vas a tener por las malas. Acostate, me dijo, me acosté con miedo siempre. Nunca has tenido marido. No he tenido, le dije yo. Se sacó su pene erepto y se empezó a echar vaselina, empezó a manipularme, me agarraba duro de la espalda, me socaba con los dedos, no hagás más movimiento porque aquí nadie te va a defender. Por miedo a que me hiciera algo peor no hice nada. Sangré bastante, tenía 14 años, pasé con mucho dolor de cintura, me dolía la cabeza, tal vez era emocional, con fiebre, tengo síntomas como de gripe o algo, le decía yo a la señora, ya se te va a quitar, me decía, y me tiraba unas pastillas”.

Carolina estuvo tres años encerrada en esa casa. La dueña la ataba de pies y manos y la golpeaba. Su única salida era, muy de vez en cuando, ir al mercado con alguna otra compañera. La llevaban vestida de chico. Había otras dos menores en la casa, pero “a ellas se las llevaron unos hombres, pagaron por ellas y se las llevaron saber para qué”. La mujer que sostiene ahora un bebé sano y tranquilo, también tuvo un bebé en el encierro, ¿quién era el papá?: “Saber”, uno de los clientes.

La dueña de la casa no le pagaba, se evadía diciendo que el trato era con su tía y que le debía dinero por su ropa, sus zapatos y el maquillaje que utilizaba para el trabajo. Carolina sospecha que la señora tenía pactos con la policía, les daba dinero y venían también los agentes a recibir servicios sexuales, incluso, dice Carolina, había una policía lesbiana que llegaba allí.

A los 17 años ella tomó a su hijo y convenció al encargado de seguridad de aquella casa en la zona 6 para que la dejara salir. Le dijo que iba a comprar tortillas. Se

lanzó temerosa a una ciudad que desconocía. Carolina siguió trabajando en la calle, de “ambulante”.

–Lo seguí haciendo en la calle, en la calle es diferente el trato, pero al final es igual porque uno sigue de víctima de los clientes, de las amistades, de los vecinos que dicen cosas de la gente de la vida alegre. Abusan sexualmente de uno y no pagan, lo golpeaban a uno. Yo siento que esta vida no tiene nada de alegre.

Carolina continúa con una rocambolesca biografía que incluye el trabajo en otro local donde las que la maltrataban eran las compañeras de trabajo. Sigue la convivencia con un hombre, con quien tuvo siete hijos, que fue alcohólico y la golpeaba. “Me dio una vida digna”, dice ella. El primer hijo, el que nació de un padre desconocido mientras ella estaba encerrada, fue asesinado en Mazatenango hace unos años, había sido pandillero, se había retirado de la pandilla, pero lo encontraron y lo mataron. “Dicen que fue una equivocación, pero yo estoy segura que era a él a quien iban a buscar”.

Otra pequeña murió a los cinco meses. Abandonó a su marido por los malos tratos y volvió a las calles, en donde se volvió adicta al alcohol y drogas, se enamoró de un hombre que vivía en la calle y allí tuvo otro hijo con él, el bebé que ahora sostiene en brazos. Ahora se refugia con Yanira Tobar, huyendo de más maltratos. Una tragedia que se definió el día que fue llevada a aquella casa, esclavizada en zona 6, una de las áreas en las que 20 años después siguen escondidas casas clandestinas y donde también se encuentran una serie de “night clubs”, con los papeles en regla, en los que las autoridades han hallado a decenas de mujeres centroamericanas encerradas.

La historia de Carolina, cuando fue vendida y fue violada por un tipo que se escondía en un armario, sucedió hace 27 años. Cuando no había legislación, cuando no se hablaba del tema, cuando no había un relator de Naciones Unidas. Cuando se cometía un delito, pero nadie lo veía, o no se consideraba delito. Carolina, de hecho, pensaba que estaba pagando una deuda de su tía, no se sabía víctima. “Hasta ahora lo estoy pensando”, dice.

Rodolfo Kepfer es psiquiatra y ha dedicado su carrera a investigar el tema de la violencia. Kepfer ve con recelo la “nueva moda” de la trata y la explotación sexual. “Desde siempre ha existido”, asegura, lamentando que nunca se hayan combatido las raíces del problema –de la explotación y la violencia-. Recuerda que en los 70 en los prostíbulos trabajaban muchas mujeres salvadoreñas –las rocoleras, le llamaban algunos- y en los “levantes” –en la calle- se podía observar a cantidad de mujeres indígenas recién llegadas del área rural. En las cantinas las propietarias ofrecían a las recién llegadas con toda tranquilidad.

Kepfer habla de los setentas, lo de Carolina fue en el 85. Trata, explotación y trasiego de personas, al menos en territorio centroamericano por décadas. ¿Cuántos casos, cuántas mujeres pueden haber sido explotadas? ¿Cuántas mujeres como Carolina quedaron marcadas, continúan en encierro o en las calles después de haber sido desechadas? ¿Cuántas redes se han ido tejiendo, fortaleciendo, perfeccionando?

La historia común, repetida

Alexander Colop, reconocido por varias fuentes como un acucioso y honesto fiscal, no teoriza, no hace elucubraciones de género o de la doctrina legal. El hombre que ha dirigido la fiscalía y que ha desarticulado varias redes y llevado a juicio a tratantes, prefiere poner ejemplos. Uno de los casos que ilustran a la perfección es el “de la nicaragüense”.

Dinora es de León, Nicaragua, madre soltera, víctima de violencia intrafamiliar y de violación por parte de su padrastro. No había salido de sexto primaria. Tiene un empleo que no le alcanza para vivir, cuando llega una persona que vive cerca de ella y con quien “tuvo algún tipo de relación no sé si fue sentimental, pero una relación bastante fuerte”, dice Colop. El hombre le dice que le conseguirá un trabajo como mesera o limpiando casas.

Dinora viaja a la Ciudad de Guatemala y es llevada a el Cow Boys III, en zona 6, la misma zona donde se ubicaba veinte años atrás la casa donde Carolina estuvo encerrada. El Cow Boys se sitúa en la Calle Martí, vía muy transitada por donde circula todo el transporte que viene del Atlántico al centro de la ciudad. El Cow Boys III funciona dando la cara al público como un “club nocturno”, con los papeles en regla –para que funcione como expendio de bebidas alcohólicas-. Es en este sitio donde le quitan la identificación a Dinora y la obligan a prostituirse. La fiscalía en Guatemala llevaba un tiempo investigando el local, pues había recibido denuncias desde Nicaragua. Se hace un allanamiento, pero Dinora calla y no declara, dice que está por su voluntad. Las otras muchachas hacen lo mismo, callan. La captadora –la figura de la persona que hace “contrataciones” o “cuida” a las mujeres– se hace pasar por una de las trabajadoras sexuales. Llega migración y al no haber denuncia, no las consideran víctimas y las expulsan del país. Víctimas y tratantes en un mismo viaje.

Pasan la frontera y allí las espera un taxi. Víctimas y tratantes regresan juntas a Guatemala. Entonces las llevan a una casa en zona 5, las mantienen encerradas y nuevamente las explotan. Después de unos meses Dinora logra escapar, se acerca a la policía y les pide que la regresen a su país de origen, la trasladan a Migración y allí dicen que ella debe pagar una multa porque se excedió en el tiempo de su

residencia en Guatemala –a pesar de que los cuatro países que forman el CA4 permite a los centroamericanos circular libremente por Guatemala y permanecer en el país por seis meses; y la Constitución reza que pueden recibir la nacionalidad con sólo pedirla-.

Ella se comunica con un cliente y éste le da dinero para el taxi y le recomienda ir a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Allí se encuentra con Sandra Gularte, jefa de la Unidad para la Prevención de Trata, quien detecta que Dinora es una víctima –pasó por la policía y migración sin que nadie hubiera dicho nada-. Sandra Gularte la recuerda como “una chica morena, sin pelo, llevaba como una gorra, nunca le pregunté porque no tenía pelo, pero en esto no hay que preguntar más de lo que se tiene que saber”. Entonces Gularte traslada el caso al Ministerio Público, donde inician las pesquisas. Hacen el enlace entre la casa clandestina y el Cow Boys III que funcionaba abiertamente.

La nicaragüense dejó como prueba anticipada una declaración, se hicieron estudios periciales psicológicos y fue retornada a Nicaragua, en donde se protege su identidad. Colop construyó un caso que parecía sólido, con declaraciones de otra víctima, con documentos encontrados en el primer local en donde había estado Dinora, con pruebas que entregaron autoridades en Nicaragua. Pero, en un primer debate los acusados fueron absueltos, pues dijeron que ella había venido voluntariamente a Guatemala. Generó sospecha que alguien declarara que Dinora era conviviente del hombre que la trajo al país.

Se cuestionó que en la casa de zona 5 no hubiera indicios de explotación sexual. Y no se dio valor probatorio a la declaración de Dinora. El debate reinició y se puso en duda la acusación de la fiscalía por el informe de la psicóloga del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el que la especialista explicaba que la de Dinora era una declaración “plana” en la que no había una carga emocional o muestras de trauma en la víctima –esto lo decía el reporte, aunque en su declaración oral la psicóloga ampliara que es posible que el shock de la víctima le haga reaccionar con estoicismo-.

Ahora, el fiscal prepara otro debate en el que expondrá “la esencia doctrinaria de la ley”. Sagastume y Colop están seguros de que ella es una víctima; probarlo es lo complicado. Así como la víctima debe convencerse de que es víctima, los fiscales deben buscar hasta el detalle mínimo para probarlo, los jueces se enfrentan a casos en los que la ambigüedad es una de las principales armas de los delincuentes y, a veces, no saben reconocerlo. Y cuando el crimen organizado trasciende fronteras es aún más complicado de asir.

Guatemala es país de tránsito, de estadía y de migración de personas: Circulan mujeres, unas se quedan y otras se van. ¿Cuántos de esos migrantes internos, cuántas de las migrantes centroamericanas rumbo al norte, resultan siendo víctimas?

La tierra de Guatemala, Centroamérica en general, está fusionada con pólvora. Cerillos de diferentes formas –guerras civiles, catástrofes naturales, violencia en las calles, más violencia en las casas– que encienden explosiones y empujan a sus habitantes a huir. En la huida pocos dejan aviso de su lugar de destino, las huellas son borradas por el que viene corriendo detrás.

La guerra interna de 36 años, el terremoto de 1976, la violencia provocada por un monstruo de decenas de cabezas, un Estado pequeño y macrocefálico que se olvida del interior del país y una capital que atrae como imán a los campesinos de las áreas rurales, genera movilizaciones dentro del país y hacia afuera. Guatemala es un puente minado por el que pasan muchos y en el que puede pasar todo.

Como México. El Instituto Nacional de Migración de México, estimaba en 2010, 140 mil “eventos” de tránsito irregular por México; estos eventos podían ser el mismo migrante intentándolo varias veces. La mayoría de esos migrantes son centroamericanos que tuvieron que cruzar o salieron de Guatemala. Uno de cada diez guatemaltecos vive en EE.UU.; uno de cada cinco hondureños; uno de cada tres salvadoreños.

Claudia López, de la Mesa Nacional para las Migraciones (Menamig), explica que “en realidad nadie puede saberlo (cuántas personas salen de Guatemala anualmente) porque justamente lo que hacen las personas que migran indocumentadamente es buscar la forma de salir sin ser vistas –por ende contabilizadas-. Además, entre quienes salen del territorio no se puede distinguir a ciencia cierta cuáles son sus destinos, si van a México temporalmente (trabajadores temporales) si van a Estados Unidos y cuántos logran llegar”. No hay datos de cuántos centroamericanos permanecen en Guatemala o en México sin documentos. Tampoco hay información sobre cuántos podrían ser víctimas de trata o explotación.

En el caso de la migración interna tampoco hay demasiados registros, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (Idies), de la Universidad Rafael Landívar, el 57 por ciento de la migración interna de Guatemala es de mujeres, en la mayoría de casos hacia la capital o las zonas urbanas. Muchas mujeres llegan para trabajar en servicios domésticos. Una cuestión de la que apenas se habla, pero que hay certezas de que existen altos niveles de explotación laboral. Mujeres que trabajan en las casas a cambio de comida, se les prohíbe salir y que incluso son víctimas de violencia física y sexual. Hay otro dato que impediría hacer

proyecciones, si se intentara calcular el número de víctimas de trata en base a los reportes de desapariciones: en algunos casos es la propia familia, su papá, su tío, quienes venden a estas mujeres a alguien más. Permanecen en su propio hogar o en el de alguien cercano siendo explotadas laboral o sexualmente.

El drama de Dinora se montó en la frontera sur. Pero la frontera norte no se salva de ser escenario de historias similares, peores quizás, porque la ruta hacia al norte va adquiriendo niveles de dificultad conforme pasan los kilómetros.

El río revuelto

El río Suchiate es un "duty free" líquido. No huele a perfume, huele a mierda. La mercancía, los migrantes, los trabajadores temporales se trasladan sobre dos neumáticos de tractor sujetos por una estructura de tabloncillos de madera, conducido por un balsero que empuja el artilugio con una pértiga.

El Suchiate es barrera y es paso, es el camino y es el tropiezo. El río es la línea fronteriza entre México y Guatemala. En invierno muere gente. Dicen los de las balsas que les ha tocado recorrer 20 kilómetros río abajo para buscar los cadáveres en el mar, que "a veces aparecen, a veces no".

En algún momento los vecinos se alarmaron porque del lado mexicano se empezó a construir un muro. Es un dique, dicen ahora, siempre que sube el río en invierno, Ciudad Hidalgo, el pueblo de la ribera mexicana se inunda. Eso pasó cuando la tormenta Stan, en 2005, arrasó en Centroamérica y llegó hasta las vías del tren que se detenían en Ciudad Hidalgo. El tren ya no llega al poblado, cambiaron las rutas.

Jabones, papel higiénico, doble-litros de soda, tuberías, galletas y dulces mexicanos; ropa de segunda mano, frutas y verduras, de Guatemala, cruzan en las balsas a menos de un kilómetro de donde está el puente, el puesto migratorio y donde se cobraría impuestos por los productos. Del lado guatemalteco hay un picop de la policía, del lado mexicano también. Como hormigas los hombres hacen cola para ayudar a descargar los productos. Ni en el borde guatemalteco, ni en el borde mexicano hay algún tipo de control de los que cruzan.

A veces, cuando se llega al Suchiate ya no es posible seguir, se acaba el dinero. Dicen que muchas mujeres se quedan en uno de los extremos de la frontera. El Suchiate se convierte en el limbo donde los migrantes permanecen a la espera de un trabajo, a la espera de un golpe de suerte, a la espera de un tipo que pague algo a cambio de sexo.

—Pasa mucho. Las mujeres vienen y se quedan sin dinero, entonces buscan trabajo en estos lugares. De allí, ya como que le agarran el gusto y se van quedando. —dice

el hombre sudoroso que pedalea un tricita por las calles de tierra de Tecún Umán, el poblado guatemalteco.

El tricita hace un gesto con la cabeza señalando las “cervecías” con paredes de madera, pintadas con publicidad de cerveza. Es mediodía y ellas ya están allí. A la espera.

Al otro lado del río, en el extremo mexicano, a mediodía, las cantinas tienen prohibido abrir. Ellas sólo pueden trabajar cuando cae el sol –es por las escuelas dirá alguien, validando la hipocresía-. Sólo están abiertas las cervecías –en donde, en teoría no se negocia con sexo- y deben cerrar a las 8 de la noche, cuando las otras empiezan a abrir. “No se aceptan drogados ni hombres uniformados ni armados”, se lee en las fachadas. (Ellas prefieren trabajar en México. “En Guatemala todos van armados”, dirán después). En Ciudad Hidalgo los prostíbulos y las cervecías están junto a la línea de tren abandonada.

En el bar de Charlie hay tres mujeres. Una alta, fuerte y morena, hondureña. Una de mediana estatura, coqueta y avispada, mexicana; y otra bajita y silenciosa, guatemalteca. Allí están las tres chicas de Charlie. Mariana, la hondureña es la administradora; ellas sólo “ficherean”. No se ocupan. Si ella quisiera, dice Mariana señalando a la guatemalteca, podría hacer buen dinero ocupándose, especialmente porque los clientes siempre buscan a la nueva y “ésta está regular”, dice refiriéndose a la apariencia y juventud de la chica que cruza todos los días el Suchiate para ganar comisiones en el otro borde del río.

Ya lo ha comentado Yanira Tobar en Ciudad de Guatemala: las trabajadoras sexuales van perdiendo su valor conforme pasan los años, a los 30 o 35 son ya viejas y no sirven. “Somos como los zapatos”, dijo Tobar, “nos vamos gastando”.

Mariana, la hondureña, dobla servilletas con el ruido del ventilador de fondo. Le interesa distinguir que el local que ella administra –el propietario es también el dueño de una abarrotería en la esquina- no es como los que están calle arriba, vía arriba. En esos lugares hay habitaciones escondidas a la vuelta de la calle o en los traspatios y sí, asegura “tienen muchas centroamericanas menores de edad”.

Dicen que allí, en Tecún Umán, en la frontera, pasa algo. Pero, así a simple vista todo parece tranquilo. En la estación de la Policía Nacional Civil hay una pizarra con los “eventos” positivos y negativos del año (positivos, las capturas; negativos, los delitos o crímenes). En las ordenadas columnas predominan los accidentes viales y las riñas, y tres o cuatro asesinatos en el año. En la pizarra no se contempla el delito de trata o de explotación sexual. La agente policial, sentada frente a una computadora no sabe contestar el por qué. Sí, hacen recorridos por el pueblo, sí los

fin de semana hacen rondas por la calle de las cantinas, pero básicamente para supervisar que no haya peleas entre los parroquianos.

La Casa del Migrante en Tecún Umán es una edificación sólida, ordenada, pintada de azul, con árboles y un mural que narra la travesía del migrante: un árbol con las raíces arrancadas.

El sacerdote brasileño Ademar Barilli es el director. Barilli es crítico con la prensa, con los académicos que después de un par de días de encuestas hacen un libro exponiendo el fenómeno de la migración. Crítico, ante todo, con los políticos y los gobiernos que dan la espalda descaradamente a la situación de los migrantes, a lo que sucede en el país para que ellos se vean obligados a huir. Desconfía de la “foritis” y “reunionitis” del Gobierno y de las organizaciones que gastan millonarios recursos y tiempo en discutir las problemáticas que él intenta aplacar desde la casona que fundó hace quince años en Tecún Umán.

—De cierta forma siempre ha habido trata. Ahora la situación es más dramática con el crimen organizado, los grupos, no pongo a los Zetas, no son parte todos de los Zetas. Ahora es la moda de los Zetas y los Alfa y los mareros. Siempre hubo delincuencia común, de que tengan mayor organización, puede ser, han ganado experiencia. Yo también he ganado experiencia, es lógico, como cualquier profesión. Pero todo esto se ha posibilitado porque se ha criminalizado la migración. Si México da una visa, todos van en avión y se termina la violencia. No necesitarían de coyotes, de traficantes. Las mismas políticas de EEUU han creado y fomentado y enriquecido el tráfico de personas, no dejan de ser culpables de toda la violencia que se genera.

Barilli afirma que casi todas las centroamericanas cuando llegan a Nuevo Laredo han tenido que “hacer trabajos”, porque se han quedado sin dinero. —Al decir trabajo ya sabe usted qué significa. Bailes, prostituirse, atender a todos, porque no es sólo a narcos, es a todo el mundo que busca esos lugares, (y las mujeres) necesitan dinero.

Son víctimas, pero el mismo sistema que criminaliza al migrante les impide denunciar. La mayoría de ellas tienen hijos y van para sostener a sus familias. Pero mientras no se combata de otra forma...

La clave para Barilli es la prevención. “Sabemos que todo migrante es posible víctima de trata y que las mujeres son más vulnerables por su condición de mujer. El asunto es evitar que caigan. ¿Por qué tenemos que esperar que los maten para ayudarlos? ¡Hasta que uno no tiene el problema adentro no se preocupa!”

Barilli habla desde la frontera, desde su encuentro con el drama de los migrantes. Desde la casona azul ve pasar a seres humanos que quizás, a pesar de las charlas de prevención, lleguen a caer en una red.

Y es que no hay mejor símil para esas organizaciones que el de “red”, ese tejido que cruza fronteras, ríos, que lleva a sus víctimas en avión, en camioneta o picop. Que atrae a las mujeres pobres de los pueblos de las Verapaces a una cantina destartalada en la capital, o a las que buscan llegar al norte, o a las colombianas o rusas a quienes les ofrecen trabajo de modelo en un país de Centroamérica. Redes que funcionan a través de la red del Internet –con pornografía y promocionando lugares de explotación-.

Es complicado detectar a las víctimas, están en las sombras. Pero es más complicado definir a los victimarios: Son la sombra.

Las manos que tejen las redes

El territorio de la trata y la explotación es amplio y líquido; la penumbra entre la legalidad y la ilegalidad hace a las redes más inasibles. Desde las pequeñas cantinas que funcionan bajo la inocente fachada de un expendio de licor -cuyo señuelo es a través de “captadores” locales o de las mismas víctimas que sin saberlo se convierten en tratantes al recomendar a una vecina del pueblo su lugar de trabajo. Hasta los “night clubs” con mujeres extranjeras que en la mayoría de casos llegan con la promesa de un contrato como modelos y edecanes y se ven obligadas a estar allí por deudas pendientes –el boleto de avión, las cirugías plásticas, el hospedaje, las amenazas-. Hasta los lugares más subterráneos: las casas clandestinas que prohíben la salida de las víctimas. Hay diversidad de nichos de mercado y éstos son aprovechados por diversidad de organizaciones.

Sandra Gularte, de la PDH, define tres tipos de tratantes: Una es la del tratante único que es una persona muy conocida o el papá, o algún pariente, que trata a su hija, la vende o la tienen en su propia casa, la explotan laboral o sexualmente. Sin relación con el crimen organizado, pero con similares consecuencias para la víctima.

Las redes pequeñas, de tres o cuatro personas que compran o coaccionan a las mujeres –incluso fingen relaciones amorosas para convencerlas–; las engañan con el ofrecimiento de trabajo de empleadas domésticas o meseras y las venden en los bares. Estas redes “medianas”, como las define Gularte, suministran mujeres a negocios con un “mercado para clases media y baja”, con víctimas guatemaltecas, llevadas de una región pobre a una menos pobre. Como las mujeres q’eqch’ies de la cantina sin nombre.

Mientras que las grandes redes, según la clasificación que hace la representante de la Procuraduría, se coordinan con redes de otros países y de forma más especializada y con mayores niveles de influencia –tanto dentro del crimen organizado, como en los aparatos del Estado-. “Mafiosos, políticos, militares, empresarios, industriales, líderes religiosos, banqueros, policías, jueces, sicarios y hombres comunes conforman una enorme cadena en el mapa internacional del crimen organizado que ha existido durante siglos”, afirma la periodista Lydia Cacho en la investigación “Esclavas del poder”. Para que funcione la maquinaria, los engranajes tienen que estar aceitados. Y uno de los principales aceites, sin duda, resulta ser el de los funcionarios que ignoran el problema y, peor aún, forman parte de éste.

Gularte de la PDH asegura: “A los que se agarra, normalmente, son a los tratantes únicos y a los tratantes de las redes pequeñas, pero no llega la justicia a todos los tratantes de las redes grandes. A ellos no se les toca, se supone que hay funcionarios de Gobierno relacionados con las redes”. Una fuente que pertenece a una organización civil pro justicia afirma: “Se conoce con nombre y apellidos quiénes están detrás”, pero no se atreve a dar nombres, aunque asegura conocerlos.

Al cuestionar a Alexander Colop, de la Fiscalía, sobre la posibilidad de la participación de funcionarios en el negocio, dice no tener ningún caso. Sólo recuerda un proceso en que se rumoraba que el propietario de un prostíbulo había sido comisario de la policía, pero no se comprobó. Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Colom (2010-2012), afirma que es muy complicado llegar a los verdaderos propietarios de las redes, pues el sistema protege por medio de sociedades anónimas y testaferros.

Para tener una versión oficial de los actuales encargados de la seguridad y prevención del Gobierno, se solicitó una entrevista con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pero ésta no fue concedida.

Lo que deducen quienes trabajan en contra de la trata es que los niveles de impunidad con que han funcionado los negocios, los controles migratorios laxos, los allanamientos en locales en donde sólo se alcanza a los “cuidadores” y no a los propietarios, podrían tener varias explicaciones: la capacidad –técnica, profesional y financiera- del sistema de prevención y justicia no se da abasto; las autoridades no reconocen las dimensiones del delito. O, peor aún, las redes están blindadas por poderes económicos y políticos que superan sus esfuerzos. Pero además de las autoridades, hay un constante señalado como principal responsable de los grandes negocios de la trata y la explotación sexual: el narcotráfico.

Las grandes sombras de la trata

Hay que marcar con rojo en el calendario de 2011 la hoja de julio. Dos hechos aislados entre sí, pero que revelarían a las autoridades el funcionamiento de dos estructuras del crimen organizado: El sábado 11, el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral y el domingo 12, fue allanada una finca de Ixcán, Quiché, en el noroeste de Guatemala fronterizo con México, donde se organizaba una concurrida fiesta de supuestos narcotraficantes.

Cabral fue asesinado cuando iba al aeropuerto con el organizador de sus conciertos en Guatemala, Henry Fariñas. En un principio se sospechó que había sido un ataque directo al cantautor –Fariñas resultó herido-, pero las investigaciones que se realizaron con una celeridad poco normal en Guatemala, revelaron que el ataque fue en realidad contra el que en ese momento se consideraba un empresario organizador de eventos. Pero Fariñas no sólo organizaba conciertos, sino que utilizaba el Club Elite, denominado club nocturno –pero conocido como un exclusivo centro de prostitución- para lavar dinero producto del narcotráfico. La trágica casualidad permitió a las autoridades descubrir una red internacional en que relacionaba a los propietarios de una franquicia de negocios de “diversión para adultos” con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

En un inicio se relacionó a Fariñas con el cartel de Sinaloa. Lydia Cacho escribió, el 14 de julio de 2011, en el medio SinEmbargo: “Si la DEA decide participar directamente con la CICIG, la muerte del cantante habría servido para evidenciar una de las redes de esclavitud de mujeres más poderosas de la región, cuyas ganancias multimillonarias terminan en bancos mexicanos y norteamericanos”.

El caso Fariñas, víctima convertida en victimario, se trasladó a Nicaragua donde fue juzgado por narcotráfico, lavado de dinero, falsificación de identidad y relación con el crimen internacional. A pesar de la afirmación de la periodista mexicana, hasta ahora la fiscalía lo relaciona con un “cartel” denominado Los Charros y no se menciona alguna relación con el cartel de Sinaloa.

David Martínez Amador, politólogo y columnista experto en crimen organizado, ve con suspicacia el hecho de que no se haya encontrado hasta el momento la relación de la red de Fariñas y los clubes Elite con la hipótesis que lo ligaba al cartel de Sinaloa. “Hay una tentación, un error de los medios, de que toda patología social se culpe a los narcos”, dice Martínez. Aunque reconoce que “todos los intentos del narcotráfico apuntan a legitimar capitales. Y por el volumen de dinero que produce el narco, de grupos tradicionales, para lavar capitales no van a poner una casa de putas, ponen una franquicia de clubs”.

El investigador asegura que solo los grandes carteles tienen la posibilidad de marcar precios y tarifas, son ellos los que organizan un macro negocio. Es probable que Los Charros sea un grupo organizado para distribución local, pero cuyo poderío no alcanzaría a ser clasificado como cartel. Quizás Los Charros, con quienes se relacionaba Fariñas, esté dedicado a Centroamérica y al lavado de dinero, relacionado sí con algún cartel. Según la fiscalía nicaragüense los negocios de Fariñas han lavado US\$3 millones desde 2005. Mientras tanto, Alejandro Jiménez alias “el Palidejo”, acusado como autor intelectual del asesinato de Cabral y del atentado contra Fariñas, es llevado a juicio en Guatemala por asesinato y asesinato en grado de tentativa. A Jiménez no se le acusa de ninguno de los cargos que maneja la fiscalía nicaragüense y costarricense para él: narcotráfico y lavado.

El asesinato de Cabral reveló información sobre el trasiego centroamericano y el sistema de lavado a través de negocios “lícitos”. Pero al mismo tiempo deja una gran pregunta abierta: ¿Por qué no se juzga a ninguno de los dos, Fariñas y Jiménez, por trata o explotación sexual?

[[OBJ]] Aquella fiesta del siguiente día al asesinato de Cabral en julio de 2011, con carreras de caballos, licor, muchachas y música, no terminó como los organizadores lo esperaban. El MP y el Mingob venían pisando los talones de los movimientos inusuales en el pequeño poblado. La fiesta apenas empezaba. Una filtración dio aviso a los asistentes, que huyeron como pudieron –en vehículos y a pie, montaña adentro- dejando tras de sí en la finca que resultó siendo, según la fiscalía, propiedad de la municipalidad de Chinique, las evidencias: un vídeo casero, armas y dinero en efectivo; que permitirían posteriormente una serie de capturas y allanamientos que brindaron valiosa información a las autoridades sobre la organización de los Zetas.

Es posible que la juerga que sólo prometía una gran resaca haya dejado heridas que aún no se dimensionan en la estructura de los Zetas en Guatemala. Una fuente cercana a la organización asegura que los invitados mexicanos corrieron por su libertad e impidieron que los guatemaltecos pudieran salvarse de las autoridades. El informante asegura que, en determinado momento, los que huían debían cruzar un río, por medio de un funicular artesanal, que los llevaría en la ruta para cruzar del lado mexicano; pero la facción mexicana, armas en mano, impidió que los guatemaltecos subieran a la cesta que los alejara de los agentes guatemaltecos. Ese día y en los siguientes apresaron a 21 personas, entre ellas cuatro mujeres mexicanas.

Carlos Menocal era el ministro de Gobernación en aquel convulso julio de 2011. El caso Cabral fue un evento inesperado, pero en el otro caso llevaba tiempo, junto al

Ministerio Público, siguiendo los preparativos de la fiesta. Después de las capturas y los allanamientos, el ex ministro está convencido de la relación entre el narcotráfico y las redes de trata de personas.

“El capo además de trasegar droga, trasiega jovencitas, para prostituirlas e introducirlas en redes clandestinas de prostitución”, asegura Menocal. La “narcofiesta” de la finca de Ixcán es el ejemplo más claro: “Las jovencitas (mexicanas) confiesan ante la autoridad de investigación que fueron victimas de reclutamiento forzado; casi todas eran de Tamaulipas, vinieron en traslados clandestinos y en muchos casos en colaboración con la policía, incluso las trasladaron en patrullas”, afirma Menocal.

El exministro explica que las muchachas, que fueron liberadas y repatriadas a México, no colaboraron en la identificación de posibles miembros de la organización, pero si “contribuyeron a marcar claramente que el tema de trata es un tema que no sólo va de sur a norte, si no que el propio narco trae muchachas de México a Guatemala”. De las ocho plazas que el ex ministro asegura fueron desarticuladas en Guatemala se evidenció casos de trata en Cobán, Huehuetenango, Quetzaltenango y Quiché: “hay evidencia documentada del pago de planillas a las jóvenes”, afirma.

Pero incluso en estos hechos, con evidencias, hay contradicciones en cómo podrían funcionar las redes.

–Yo estaba encargada de contratar a las prepago- dice Mariela, es el nombre ficticio para esta mujer que trabajó para un ala administrativa de los Zetas. Las prepago son las trabajadoras sexuales que acuerdan por adelantado el lugar de reunión y el precio para ofrecer sus servicios.

Mariela explica que uno de sus encargos era hacer el contacto con agencias para contratar a mujeres, en especial colombianas, que eran llevadas para las fiestas privadas que se organizaban. Ella no menciona que hubiese algún tipo de negocio directamente relacionado con la trata o la explotación dentro de la “la empresa” como llama esta mujer a la organización.

Es posible que la estructura jerárquica de Los Zetas -con un ala administrativa, que según Mariela y otras fuentes estuvo bajo el mando de William de Jesús Torres Solórzano, alias “Comandante W” y que fue detenido en México en julio de este año, y el ala operativa, la más violenta organizada para ganar territorios, supuestamente bajo el mando de Z200 –cuya identidad no ha quedado plenamente establecida- promueva la diversificación de determinados negocios sin que otras ramas de la comandancia estén informadas.

Menocal advierte que son varias las ramificaciones dentro de la organización de los Zetas, en diversos niveles de dirección: unos se relacionan con el trasiego de armas, el de drogas y otras ramas el de trata. Es posible que un ala administrativa contrate esporádicamente a muchachas prepago y no se haga servir de las propias redes de la organización. Es decir, es propietario, pero usuario de negocios alternos de redes especializadas.

Hay redes especializadas y muy profesionales dedicadas únicamente a la trata, explica Martínez Amador. De hecho, el investigador duda que las redes de trata guatemaltecas estén directamente relacionadas con los grupos de narcotraficantes tradicionales (familias como los Mendoza, o los Lorenzana). Considera que en determinado momento pueden relacionarse por cuestión de negocios, pero no necesariamente son parte del de la trata.

Hay dos casos que ilustran cómo funcionan las redes especializadas. La que creó una aceitada estructura que traía con engaños a mujeres de Colombia y las mantenía en Guatemala por la fuerza y con amenazas de que si huían asesinarían a sus familias en su país. Un trabajo de inteligencia entre los dos países, y un trozo de papel que una de las mujeres logró tirar a la vecindad pidiendo ayuda, permitió rescatar a las víctimas y detener a tratantes guatemaltecos y colombianos. Y la “red jordana”, que como explica Menocal no sólo llevaban mujeres guatemaltecas a Jordania –con falsas promesas de trabajo doméstico, para luego prostituirlas en condiciones inhumanas-, si no también hacían trabajo de trata en Guatemala. La “red jordana” reveló como una misma organización puede trabajar con diferentes modalidades y en diversos territorios. Mientras llevaban mujeres a Jordania, también explotaba a mujeres en exclusivos burdeles de la zona 9 y 10, y regentaban algunos decadentes negocios de la calle Martí y del Cementerio General.

Otra forma de trabajar entre las redes y que posibilita mayor agilidad para evadir la ley, es el de redes dedicadas exclusivamente a la “captación” de víctimas y luego “distribuir las” en diversos negocios. Seguir las pistas resulta más complejo.

Y es así como se revelan poco a poco las víctimas –porque logran escapar, porque encuentran un espacio de apoyo, porque algunas investigaciones prosperan, porque algún allanamiento tiene éxito o por algún golpe de suerte-. Apenas se esbozan y definen quiénes podrían ser los dueños de las redes, apenas se empieza a dar breves linternazos del contubernio entre otras redes del crimen organizado y la posibilidad de que haya funcionarios, empresarios legales y narcotráfico implicados. Pero queda otro personaje pendiente de retratar: aquellos que, conscientes o no, resultan siendo los verdugos de la historia: los clientes.

Y así, termina todo siendo un acto de trapecistas en un sórdido circo.

El público: Ebrio, macho, aplaude histérico viendo el show. Con los ojos vidriosos y los bolsillos llenos de monedas, de fichas, de tarjetas de crédito. Expectantes.

Las redes: grandes, medianas, pequeñas, violentas o manipuladoras. Tensas, bien hiladas. A la espera.

Las trapecistas: Se sujetan con las manos sudorosas a una barra endeble. Se balancean, cada una con una historia diferente, pero con capítulos en sus biografías que parecen calcados unos de otros. Con los leotardos de las posibilidades remendados. El invisible y letal revólver de la necesidad, de los hijos por mantener, de los padres ausentes, de la violencia intrafamiliar, de la falta de educación las apunta.

Ellas saltan. Y caen.